

Panorama Actual del Bajo Cauca Antioqueño





INTRODUCCIÓN

La región del Bajo Cauca antioqueño se ha caracterizado por la explotación de la minería, actividad que ha determinado históricamente el estado de los recursos naturales y la dinámica de su configuración regional.



Iglesia Población de El Bagre (Foto: VIZTAZ)

La región del Bajo Cauca antioqueño está conformada por los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza y su entorno está constituido por Amalfi, Anorí, Ituango, Segovia y Valdivia. La región comprende las tierras entre las planicies del bajo río Cauca y las estribaciones occidentales de la Serranía de San Lucas, entre los ríos Nechí y Cauca. La dinámica física se estructura por el curso del río Cauca, recorriendo la región a partir del municipio de Ituango en el sur, hasta la parte nororiental de la región, un poco más allá de la desembocadura del río Nechí, en límites con el departamento de Bolívar.

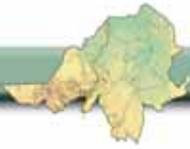
Los ríos Cauca y Nechí constituyen el contorno básico de la región. La Troncal del Norte permite el desarrollo de las planicies de las riberas del Cauca, al integrar su territorio e impulsar el flujo de población, la actividad económica y la comunicación entre los cascos urbanos. La Troncal Occidental, a lo largo de la cual se ha consolidado un núcleo comercial importante, se considera como la principal vía de la región y comunica los municipios de Caucasia, Tarazá y Cáceres y la Troncal de la Paz une los municipios de Caucasia y Zaragoza. La vía que une a Zaragoza con Cáceres conforma un anillo vial que comunica a estos municipios con Tarazá.

La región se ha caracterizado por la explotación de la minería, actividad que ha determinado históricamente el estado de los recursos naturales y la dinámica de su configuración regional.

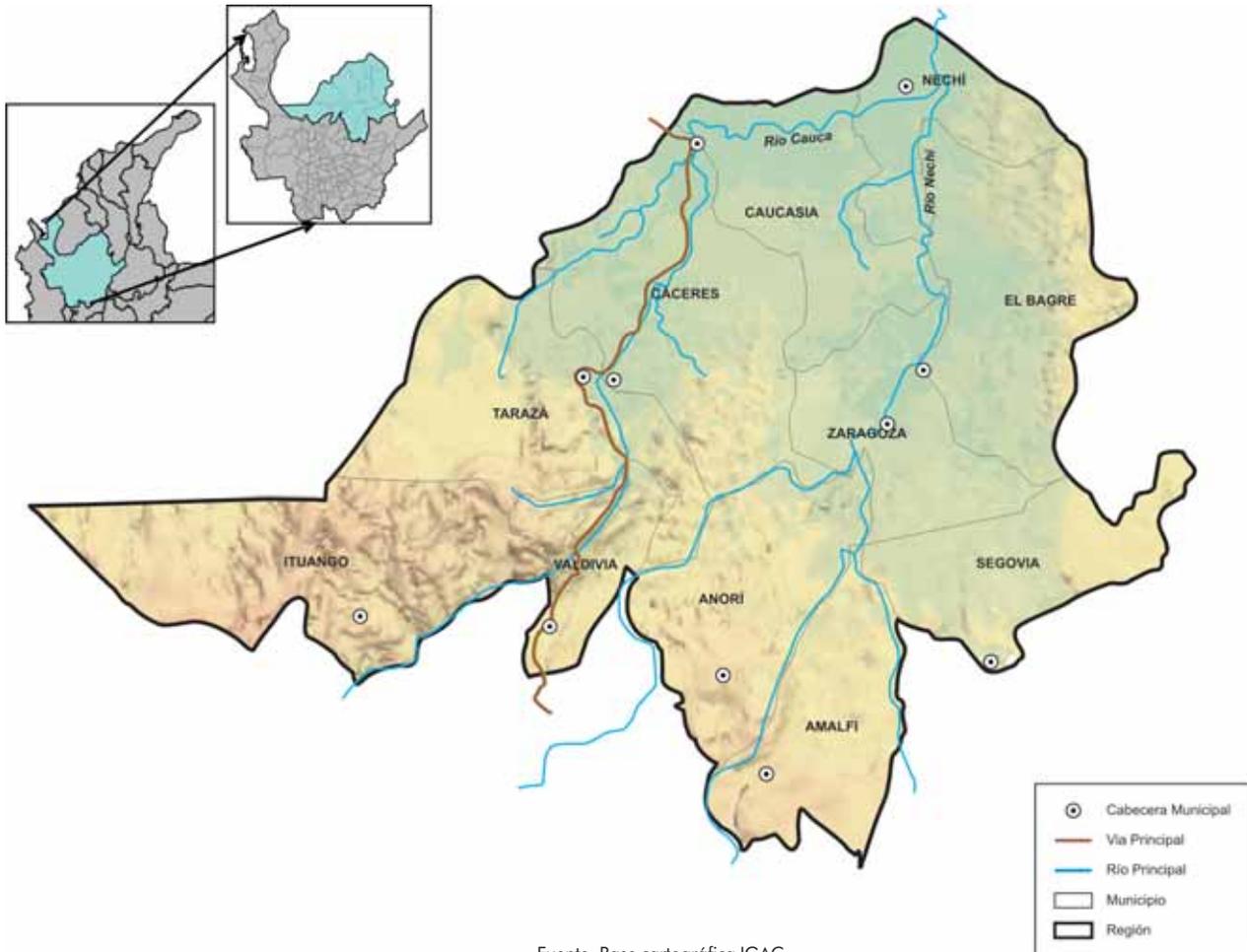
De acuerdo con Clara Inés García, la región posee una identidad, cuyas raíces se remontan hasta los primeros tiempos de la Colonia, articulada a la producción de oro. La explotación minera se reinicia en la segunda mitad del siglo pasado, generando un proceso de colonización con varias corrientes migratorias provenientes de las sabanas de Bolívar y de áreas deprimidas de Antioquia, atraídas por la fiebre del oro o huyendo de la violencia partidista de los años cincuenta. La fundación y expansión de varias cabeceras municipales se hace con invasiones de predios, enfrentamientos y conflictos con las compañías mineras, paros cívicos y tomas campesinas a los cascos urbanos, primero para conseguir el acceso a los servicios públicos y, posteriormente, para protestar contra las consecuencias del escalamiento de la confrontación armada¹.

La dinámica regional del Bajo Cauca es el resultado del llama-

¹ Clara Inés García, *El Bajo Cauca antioqueño*, Bogotá, Cinep e Iner U. de Antioquia, 1993. Este estudio ha sido la base para la caracterización histórica de los elementos que se relacionan con la violencia.



MUNICIPIOS Y RELIEVE DE LA REGION DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO Y SU ENTORNO



Fuente: Base cartográfica IGAC
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República

do proceso de colonización de territorios vacíos que se incorporaron al espacio productivo nacional, resultado de los cambios en el modelo de desarrollo y de los nuevos rumbos que fue tomando la economía del país, y que en el caso del Bajo Cauca, constituye un lugar estratégico para la articulación de la red vial del país, así como para la explotación de recursos mineros.

Al respecto, María Teresa Uribe plantea que esta región, tradicionalmente excluida de la dinámica del desarrollo a nivel nacional en razón a la explotación minera, fue convertida en objeto de la inversión privada y en lugar estratégico en el contexto del modelo exportador. Este proceso, que contó con la violencia y la confrontación como dos de sus ejes centrales, en cuanto la incor-

poración del territorio a la vida socioeconómica regional a través del tipo de “colonización estratégica”, estuvo acompañado de la emergencia de nuevos conflictos y tensiones que no siempre fueron tramitados por la vía institucional. “No es por casualidad entonces que fuese en la frontera histórica y en los territorios de exclusión donde se desarrollaron las formas más agudas de





violencia durante los años cincuenta; donde los grupos alternativos al bipartidismo han tenido una influencia mayor o que más recientemente, hayan sido éstos los territorios con alta incidencia de la confrontación armada, y el narcotráfico².

Aquí es importante señalar que en la medida en que desde comienzos de la década de los ochenta el Bajo Cauca fue priorizado como objetivo de la política de paz, buscando atacar las *causas objetivas* de la violencia³ mediante una estrategia que orientaba la acción del Estado hacia las zonas afectadas por la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley, se genera en la región un efecto perverso expresado en que los grupos subversivos encontraron aceptación en las poblaciones potencialmente beneficiarias de la inversión estatal. Fue así como en el ámbito regional se afianzó la percepción de que la presencia del actor armado irregular era sinónimo de progreso, de manera que la expectativa de mejoramiento de las condiciones de vida en el corto plazo terminó incrementando el apoyo social, expresado en una especie de "demanda" por presencia guerrillera.

La guerrilla también encontró aceptación social en zonas con las características del Bajo Cauca por otras tres razones que cabe mencionar⁴. Por una parte, en regiones cocaleras donde la guerrilla lidera paros y marchas para llamar la atención sobre problemas sociales reales, se hace

merecedora de enorme reconocimiento y en caso de incumplimiento estatal o respuesta represiva se multiplica la simpatía por la "causa insurgente". Un segundo elemento de apoyo al actor armado irregular radica en la función que cumple en el logro del acceso a la propiedad de la tierra o en la continuación de su posesión. La existencia de terrenos baldíos, de propietarios anónimos y de debilidad del sistema institucional de entrega, registro y respeto a la propiedad apalancan este apoyo. El tercer motivo de apoyo es la demanda por "seguridad y justicia". En estas zonas, la guerrilla se ha arrogado las funciones de "juez, conciliador y policía", conduciendo a que la población demande su presencia.

En los años ochenta, paralelamente a la acción guerrillera, se dio en el Bajo Cauca el surgimiento de movimientos cívicos de origen popular que fueron interferidos por la guerrilla, como en Zaragoza, en 1985, cuando una toma guerrillera llevó al fracaso de una movilización de protesta de pequeños mineros. Así mismo, los intensos combates entre la guerrilla y el Ejército, causaron éxodos de campesinos, en parte

hacia las cabeceras municipales y en parte fuera de la región, trasladando a otros escenarios los problemas propios de la carencia de tierra en el medio rural y el crecimiento desordenado de los cascos urbanos⁵.

Entre 1986 y 1988, la Unión Patriótica hizo su aparición como organización político partidista y encontró en la región apoyo en los pobladores y en los movimientos sociales cobijados en la Anuc -Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- y en el Movimiento 27 de febrero de Zaragoza. Paralelamente al surgimiento de la UP, ocurren en forma sistemática masacres en las poblaciones de El Bagre, Cáceres, Valdivia y Segovia.

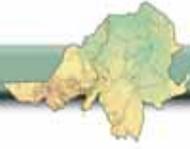
La evolución de la confrontación armada en el Bajo Cauca muestra hacia finales de la década de los noventa, lo que en el ámbito regional se interpretó equivocadamente como un proceso de "pacificación", por el efecto que sobre el mismo tuvo la mayor influencia de los grupos de autodefensa en la región -cuyos orígenes se remontan hacia mediados de la década de los ochenta-, que avanzaron con el propósito de desplazar a los gru-

² María Teresa Uribe de Hincapié et.al, Desplazamiento forzado en Antioquia. Secretaría de Pastoral social y Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos. Este texto es referencia obligada de los estudios sobre violencia en Antioquia y una de las principales fuentes consultadas en este panorama.

³ Por "causas objetivas" se entienden las realidades políticas, sociales, y económicas que generan un deterioro de las condiciones de existencia de la población. En un sentido amplio, la exclusión política, la pobreza y los profundos desequilibrios configuran las causas objetivas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad.

⁴ Ver la exposición de los factores que determinan la demanda por guerrilla en Fernando Gaitán y Malcom Deas "Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia" Fonade (1995).

⁵ Todos estos antecedentes son tomados del estudio de Clara Inés García.



pos guerrilleros de sus zonas de influencia. En este estudio, se pondrá de presente que existe suficiente evidencia que permite poner en duda la lógica de “protección” a la que estas organizaciones ilegales apelaron para justificar su presencia, como si constituyeran una simple respuesta a una demanda de seguridad por parte de las poblaciones bajo presión de los grupos guerrilleros⁶. Así mismo, se mostrará

cómo la elevada intensidad que la violencia adquiere por momentos se relaciona, fuera de los factores anotados, con la existencia de una fuerte disputa entre organizaciones irregulares por el dominio de la región, en razón a la elevada valoración estratégica que le asignan, poniendo de presente el muy limitado alcance del enfoque basado en la superación de las *causas objetivas* como condición para reducir la

violencia⁷. De aquí que el Gobierno haya dado prioridad en la Política de Defensa y Seguridad Democrática al restablecimiento del orden público como requisito indispensable para asegurar el control eficaz del territorio, garantizando la protección efectiva de la población civil, el monopolio exclusivo de las armas por parte del Estado y las condiciones que favorezcan el desarrollo regional.

CONDICIONES OBJETIVAS Y FACTORES ESTRATÉGICOS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS IRREGULARES

De acuerdo con estudios realizados recientemente, la democratización no sería un desactivador de la lucha armada, sino un entorno perfectamente aprovechable por los grupos irregulares.

La situación del Bajo Cauca, caracterizada por la persistencia de la confrontación armada en un escenario determinado por una economía de enclave ligada a la explotación de un recurso minero que tiene una alta demanda externa y cuyos beneficios no irrigan la muy precaria economía regional, hizo que la región fuera priorizada como objetivo de las acciones del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) entre 1982 y 1994⁸. Al respecto, es importante destacar la concepción que orientó esta política pública hacia regiones apartadas y con graves problemas de orden público.

Durante el Gobierno de Belisario Betancur, se diseñó una política

de paz que buscaba enfrentar los diversos factores que habían engendrado la violencia en el país mediante el PNR, una estrategia de participación comunitaria que buscaba erradicar de las regiones afectadas por la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley, las *condiciones objetivas* que las hacen proclives a la violencia. La administración de Virgilio Barco continuó con el propósito de remover las causas objetivas de la violencia, pero abandonó la idea del gobierno anterior de dirigir las inversiones exclusivamente hacia las regiones afectadas por la confrontación armada. La cobertura del PNR se amplió para cubrir zonas pobres y abandonadas por el Estado, en el propósito de combatir la po-

breza absoluta. Durante el cuatrienio del gobierno de Cesar Gaviria, se amplió la cobertura, con lo cual se disminuyó drásticamente la inversión per cápita y por tanto, se produjo el desmonte gradual del PNR⁹.

⁶ Daniel Pécaut. “De la violencia banalizada al terror: El caso colombiano”. En *Guerra contra la Sociedad*. Bogotá, Espasa, 2001. Un discusión en torno a la retórica de protección a la que acuden las organizaciones armadas ilegales para justificarse ante la población se encuentra en Letizia Paoli, *Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style* (Studies in Crime and Public Policy).

⁷ Al respecto es importante tener en cuenta la discusión planteada por Francisco Gutiérrez, (mayo - agosto de 2001). “Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos”, en: *Análisis Político*, Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, núm. 43.

⁸ María Elvira Naranjo, *La construcción de la paz en las regiones en medio del conflicto. Municipios y regiones de Colombia*. Fundación Social. Bogotá. 1998.

⁹ Gilma Rocha, PNR: “Una década de presencia estatal en regiones marginadas”. En *Boletín de estadísticas* No. 476, DANE. Bogotá. 1992.





Río Cauca - Población de El Bagre (Foto: VIZTAZ)

Pese a que son varios los trabajos que sugieren que no existe una correlación entre variables socioeconómicas municipales y violencia; y que la violencia en el país no es función lineal de la pobreza¹⁰, la permanencia del lugar común tiene expresiones recientes en el diseño de la política pública para las regiones apartadas y conflictivas. Al respecto, cabe señalar que en lo esencial la visión que orientó la inversión hacia las zonas afectadas por la violencia entre 1982 y 1994, se encuentra presente en la concepción inicial del Plan Colombia. En efecto, la administración de Andrés Pastrana, al reconocer que la violencia en el país posee profundas raíces en la exclusión económica y política y en el ejercicio de una democracia con desigualdad y pobreza,

retoma el enfoque de las *causas objetivas* de la violencia. De aquí que la inversión deba contribuir a crear las condiciones para lograr la paz, al construir y fortalecer la democracia, de cuya debilidad las diferentes manifestaciones de violencia son un síntoma¹¹.

De acuerdo con estudios realizados recientemente, la democra-

tización no sería un desactivador de la lucha armada, sino un entorno perfectamente aprovechable por los grupos irregulares. La convergencia entre procesos de expansión territorial de las organizaciones al margen de la ley y procesos de descentralización no parece corroborar la tesis de que a mayor democracia, menos violencia. La evidencia disponible muestra que la descentralización llevó a que los grupos irregulares le apuntaran más al poder local y regional que al poder central, aprovechando los espacios que éstos brindaban, sin renunciar a sus pretensiones de toma del poder nacional¹².

Con lo dicho, no se está sugiriendo que tenga mayor sentido la hipótesis que parecen defender algunos autores¹³ en el sentido de que la violencia estaría asociada, más bien, a las condiciones de prosperidad y dinamismo de la economía. Según esta hipótesis, existiría una correlación entre el grado de actividad económica de la región y la intensidad de la violencia, incurriendo en una simplificación no menos considerable. Es importante reconocer

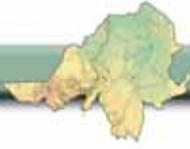
¹⁰ Bejarano, Echandía, Escobedo y León, (1997). *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en áreas rurales*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia - Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Camilo Echandía, (1999). *El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia*, Bogotá, Presidencia de la República.

Varios trabajos del Cede de la Universidad de los Andes (Vélez, 1999; Sánchez y Núñez, 2000 y Bottía, 2002), muestran que la lógica en la expansión de la guerrilla hacia nuevos territorios se encuentra altamente relacionada con su potencial estratégico, representado en la explotación de recursos mineros, cultivos ilícitos, actividades dinámicas y un nivel de urbanización superior al de los municipios donde la guerrilla hizo presencia inicialmente.

¹¹ Plan Colombia. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la paz- Departamento Nacional de Planeación. Puerto Wilches, diciembre de 1998.

¹² Fabio Sánchez y Mario Chacón, "Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002". En: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Editorial Norma, 2006

¹³ Armando Montenegro y Fernando Gaitán. "Justicia y Desarrollo" DNP, 1995.



que estas zonas dinámicas, como el Bajo Cauca, presentan otras tres características: 1) Atraen numerosos migrantes y la distribución de ingresos es muy desigual, 2) La ausencia de regulación de las bonanzas locales conduce a inversiones anárquicas; 3) La presencia de las instituciones estatales es precaria y la infraestructura es insuficiente¹⁴.

Fuera de los factores anotados, las condiciones estratégicas que ofrece la región, en términos de la obtención de recursos y las ventajas en el desarrollo de la confrontación, juegan un papel central. Es así como durante el proceso de implantación, la guerrilla consideró la zona por su posición privilegiada en términos de permitir la comunicación con el Urabá, la Serranía de San Lucas y el Magdalena Medio. Fue en la reserva ubicada en territorios de Cáceres y Zaragoza, en el Bajo Cauca, y Anorí, en el Nordeste antioqueño, donde el ELN y las Farc lograron desarrollar sus bases y establecer sus zonas de refugio, asentamiento y avanzada.

Al respecto, es importante señalar que Ituango, durante décadas región de tránsito y de descanso de los grupos guerrilleros que operan en el Urabá, Occidente y Bajo Cauca, es el escenario donde se presentan con mayor frecuencia e intensidad los eventos de la confrontación armada. Algunas veredas del municipio, (La Vega del Inglés, Santa Ana, La Manga y Badillo) ubicadas en el extremo occidental, hacen parte

del Nudo de Paramillo, en el extremo norte de la cordillera occidental, un territorio a todas luces estratégico para los grupos armados. Así mismo, donde la cadena de montañas de los Andes comienza su caída hacia las tierras planas bañadas por los ríos Cauca y Nechí, el municipio de Ituango tiene al corregimiento El Aro, vecino de Valdivia, y punto clave de conexión entre el Nudo de Paramillo, el Bajo Cauca, el Sur de Bolívar y el Magdalena medio.

La primera organización guerrillera que actuó en la zona es el ELN hacia finales de los años sesenta, a través del frente Camilo Torres, al que se le encomienda no sólo esta área sino el territorio contiguo del Nordeste antioqueño, ambas zonas productoras de oro y por tanto de las preferencias de esta organización, dedicada a hacer presencia en todos los centros mineros del país. Más tarde, su presencia armada se amplió a través de los frentes José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomás y la Compañía Anorí¹⁵.

La predilección del ELN por el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia se explica porque su principal bandera política apunta a detener el "saqueo" de los recursos o cambiar las condiciones en que el Estado negocia su explotación. En este contexto de explotación de recursos mineros y la existencia de tierras baldías, el ELN propuso a la comunidad la adopción de un reglamento con procedimientos para la ex-

plotación del recurso no renovable, así como para la distribución de las tierras. Con lo anterior, el ELN buscaba que la comunidad lo discutiera y lo enriqueciera, además de que recibiera la opinión de las Farc, con las que compartían el dominio territorial de la zona. La comunidad debía garantizar la explotación moderada del recurso minero, cobrar regalías e impuestos por su usufructo, controlar el ingreso de maquinaria y exigir la reforestación del terreno explotado. En cuanto a los criterios para la distribución de tierras, se crearon comités, integrados por las personas más "acatadas de la zona", para su asignación, que no excedería las 150 hectáreas y garantizaría zonas de reserva, se privilegiaría no a individuos sino a proyectos comunitarios, que destinaran sus utilidades a obras y fondos colectivos. Los beneficiarios para la formalización de la entrega de la parcela debían asumir en un documento el compromiso de "hacer finca, trabajar la agricultura y producir alimentos". El comité de tierras contaba con la potestad de resolver conflictos de linderos e imponer sanciones a quienes incumplieran los acuerdos¹⁶.

¹⁴ Daniel Pécaut. "Presente, pasado y futuro de la violencia", en *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Espasa, 2001.

¹⁵ Carlos Miguel Ortiz, "El Bajo Cauca". En Cubides, Fernando, et al. *La violencia y el municipio colombiano 1980 - 1997*, Bogotá, Universidad Nacional - Centro de Estudios Sociales. 1998.

¹⁶ Ver el desarrollo de la estrategia política del ELN en las zonas de enclave en el estudio de Mario Aguilera, "ELN: entre las armas y la política". En: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, Bogotá, Editorial Norma, 2006.





Por su parte el EPL, a través del frente Francisco Garnica, se extiende desde el Nordeste hacia el Bajo Cauca antioqueño. Hacia comienzos de los años ochenta, la zona de influencia de esta guerrilla abarcaba las Serranías de San Lucas y Ayapel, las llanuras costeras de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Alto Sinú y río San Jorge. Su ubicación geográfica resultaba estratégicamente importante por la comunicación entre las montañas de Antioquia y la zona de Urabá. Su frente político tuvo a Caucasia como epicentro, convirtiéndose en un apoyo importante para las luchas campesinas de esta región y del Nordeste, en las movilizaciones por la tierra y en los procesos de tomas de fincas.

Con los duros golpes que el Ejército propinó al ELN en Anorí en 1973, el grupo guerrillero casi desaparece y las Farc entran a sustituirlo, a través de los frentes 5, 18 y 35¹⁷. Comenzando la década de los ochenta, renace fortalecido el ELN, así los años siguientes serán de presencia conjunta de las tres guerrillas con una *ofensiva* inusitada, que se traduce no sólo en acciones contra el Ejército e instituciones financieras locales sino también contra las dos principales empresas (Mineros de Antioquia y la firma francesa OIC) y en secuestros y extorsiones, que recaen en hacendados y ganaderos y, poco a poco, en el acoso de la "vacuna" a sectores populares, tales como el de los pequeños mineros.

Hacia la segunda mitad de los noventa, el ELN protagoniza una cruenta disputa con las AUC, que termina debilitando de manera crítica a la organización guerrillera en antiguos territorios bajo su influencia: Piamonte-Puerto Colombia, vía Cáceres-Zaragoza, vía Caucasia-Zaragoza. De otra parte, en octubre de 1998, se produce el hecho que acarrea mayores costos para esta guerrilla, cuando integrantes de la compañía "Cimarrón" del frente José Antonio Galán dinamitaron un tramo del Oleoducto Central de Colombia, ubicado a 34 kilómetros de Segovia, ocasionando el derrame de petróleo por el río Pocuné, muy cerca de la población de Machuca. Al paso del caudal, una chispa originó una explosión que causó la muerte en medio del fuego de 84 personas, la mitad de ellas niños. Otras 30, quedaron heridas. En un principio, el ELN culpó al Ejército de prender el fuego, pero ante la presión nacional e internacional, finalmente admitió a regañadientes su responsabilidad. "Lo ocurrido en Machuca no es la política del ELN. Lo sucedido fue un accidente, en el cual el mando que dirigió la operación no midió las consecuencias, así como existen razones por las que no debería haberse construido

allí el oleoducto. Es un error que reconocemos e insistimos en que nuestras unidades sean más cuidadosas. Además, tomamos los correctivos internos en el marco de las responsabilidades", fue uno de los apartes del comunicado que la organización dio a conocer cuatro días después del atentado. Machuca se convierte en la acción por la que el ELN tendrá que responder en cuanto a reparación se refiere si esta guerrilla opta definitivamente por recorrer el camino hacia la paz¹⁸.

A comienzos del siglo XXI, los signos de debilitamiento del ELN en la región son inequívocos. Las Farc adquieren un mayor protagonismo y muestran una tendencia ascendente en su capacidad ofensiva, mientras que el ELN registra los niveles más bajos de actividad armada. En julio de 2005, el fuerte desgaste y la presión incesante de la Fuerza Pública llevaron al frente Héroes de Anorí a desmovilizarse. Los 18 integrantes de la estructura dejaron las armas, incluido su cabecilla, Ramiro Alberto Ruiz, alias "Edward". El desmantelamiento del frente Héroes de Anorí debilita la estructura del ELN en el Bajo Cauca, donde el grupo tiene cada vez menor incidencia, cuando a principios de los años no-

¹⁷ En esa operación militar la comandancia del ELN quedó desperdigada y aislada en la zona del río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, al punto que demoró casi tres meses en reunirse de nuevo para reorganizarse. Así lo reconoció el propio Manuel Pérez, sacerdote español, fundador y uno de los comandantes del ELN, muerto en febrero de 1998.

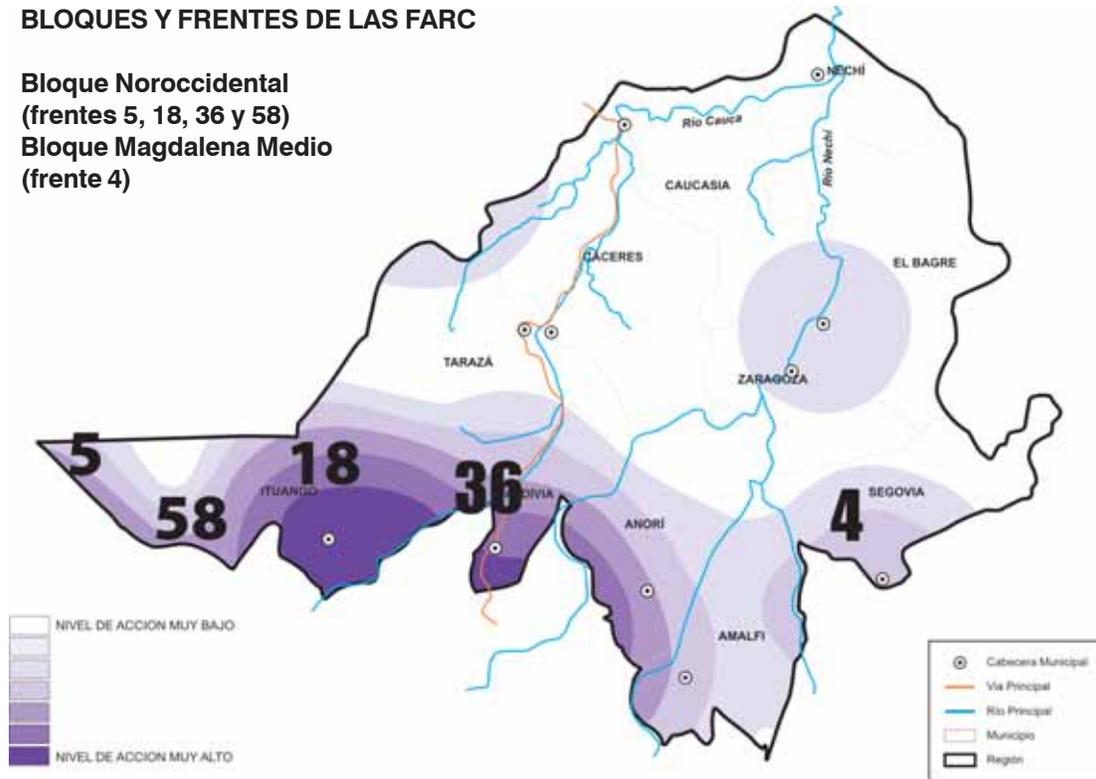
¹⁸ El Tribunal Superior de Antioquia absolvió a la cúpula del ELN por los delitos de homicidio, terrorismo y lesiones personales, por no encontrar evidencia fehaciente que los relacionara directamente con los hechos de Machuca. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso extraordinario de casación contra la sentencia. Sin embargo, según la recién creada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el ELN debe remediar el daño que le hicieron a los habitantes de Machuca de tres maneras: el perdón público; la reparación colectiva a la población para que quede en las mismas condiciones en las que estaba antes y la reparación individual, con la cual se dignificaría a los perjudicados por el incendio.



PRESENCIA ACTIVA DE LAS FARC 1998 - 2005

BLOQUES Y FRENTES DE LAS FARC

Bloque Noroccidental
(frentes 5, 18, 36 y 58)
Bloque Magdalena Medio
(frente 4)



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República
Fuente de información: Das
Fuente base cartográfica: IGAC

venta, el frente llegó a contar con varias compañías móviles con un amplio campo de acción en Antioquia. Militarmente, el frente Héroes de Anorí estaba en franca decadencia. Desde 2001, la acción contundente del Ejército, los enfrentamientos con el bloque Mineros de las AUC y las deserciones hicieron que la compañía se redujera a menos de veinte hombres de los más de cien que llegó a tener. En 2002, el Comando Central (Coce) reorganiza la estructura, uniéndola al frente 'Jorge Eliécer Gaitán' y acrecen-

tando sus efectivos. Pero el debilitamiento continuó. En octubre de 2004, el Coce ordena a "Edward" desplazarse a la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar para unirse al frente 'Alfredo Gómez Quiñónez'. En ese momento, "Edward" decide desmovilizarse.

Los errores políticos, las deserciones y el impacto de la acción militar y de las AUC hacen que el tiempo corra en contra del ELN, convirtiendo la negociación en una opción para este grupo insurgente. En el mencionado estudio

de Mario Aguilera, se identifican las causas del estancamiento militar del ELN, que corresponden también a la tendencia de este grupo guerrillero a privilegiar la dimensión política de su estrategia sobre la militar y a la decisión de no involucrarse en la actividad coquera, con lo cual la organización pierde cualquier posibilidad de continuar en el escenario regional.

La relación entre el estancamiento del ELN y la expansión de los cultivos de coca, es ilustrada por





la Fundación Ideas para la Paz a partir del caso de Anorí¹⁹. Los cultivos de coca del norte de Antioquia aparecen con fuerza al final de la última década. Son parte de la “avanzada” de las autodefensas, que sube desde el Bajo Cauca a esta zona minera. El punto de quiebre se da en octubre de 1998, cuando el bloque Mineros asesina al alcalde de Anorí y a la personera del municipio. Desde ese entonces, el crecimiento de los cultivos ha sido significativo: de 174 hectáreas en el 2000 pasó a 614 en 2003, un crecimiento de casi el 400% en tres años (cifras del proyecto SIMCI -UNODC). Anorí se convirtió en el municipio con el mayor número de cultivos en Antioquia y el departamento es hoy el quinto con más cultivos en el país y el segundo en el que más laboratorios se han destruido. En este contexto, la decisión del ELN de sustraerse de la principal economía de guerra en el Bajo Cauca dejó al frente Héroes de Anorí sin posibilidad de sostenerse y en consecuencia por fuera de la confrontación.

¹⁹ La derrota de la coca. Fundación Ideas para la Paz, Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana Número 17/Junio 17 de 2005.

²⁰ Los principales aspectos sobre los orígenes y evolución de los grupos de Autodefensa provienen del estudio “Territorialidad de las Autodefensas”, elaborado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, 2002.

²¹ La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano a pagar 3.400 millones de pesos por las muertes de 19 campesinos cometida por las ACCU en los corregimientos El Aro y La Granja, en la localidad de Ituango. En su parte resolutoria la sentencia dice que el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, del desplazamiento forzado de campesinos, a los vejámenes a los que fueron sometidos los pobladores, debido a que no se tomaron las medidas necesarias para evitar lo ocurrido o detener al grupo armado ilegal que perpetró las masacres, a través de los miembros de la Fuerza Pública y autoridades que hacían presencia en la región.

La aparición de los grupos de autodefensa en la región, que data de mediados de los años ochenta, se encuentra estrechamente ligada al narcotráfico, que ante todo buscó que estructuras armadas custodiaran sus intereses económicos de la acción de la guerrilla. Desde la década de los ochenta, y como parte de su actividad en el nordeste, grupos como Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) se extendieron desde el Magdalena Medio al Bajo Cauca, dirigiendo sus acciones contra los dirigentes de la Unión Patriótica y líderes cívicos y comunitarios. En los años noventa, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) se desplazaron hacia Tarazá, Caucasia y la franja occidental de Cáceres, hasta consolidar en esta zona un área de influencia y asentamiento²⁰.

El municipio de Caucasia se encuentra estrechamente ligado a los inicios de las Accu en el Bajo Cauca. Su territorio fue la zona de refugio de los integrantes del clan Ochoa y donde confluyeron todos los miembros de las Accu, desde los Castaño hasta *Doble Cero*. En los municipios de Segovia y Zaragoza, la intensidad que adquiere la violencia hacia finales de la década de los ochenta responde a las incursiones llevadas a cabo por Fidel Castaño y dirigidas personalmente por alias el *Negro Vladimir*, que se traducen en masacres como la de Segovia el 11 de noviembre de 1988, en la que fueron asesinadas 43 personas.

Con el sometimiento a la justicia del Cartel de Medellín y el traslado de Carlos Castaño a Córdoba, la violencia en esta zona disminuyó ostensiblemente, salvo en los municipios de Caucasia, Tarazá y Cáceres. A partir de 1990, comenzó a operar en Segovia una agrupación que se denominaba *Autodefensas del Nordeste Antioqueño*, que realizó acciones a lo largo del oleoducto Colombia. Esta organización rápidamente desapareció.

En su proceso de expansión, las Accu desataron entre 1996 y 1997 una escalada de asesinatos, desplazamientos masivos, incendio de viviendas y saqueos, que tiene su expresión más crítica en el municipio de Ituango, donde se registraron en la vereda La Granja y el corregimiento El Aro, diferentes hechos de violencia que cobraron la vida de 19 personas. Sobre el particular, es importante anotar que la justicia colombiana ha establecido la responsabilidad de Salvatore Mancuso, así como de algunos miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, el Estado reconoció su responsabilidad por no haber garantizado derechos básicos a la vida, la integridad personal y la propiedad²¹.

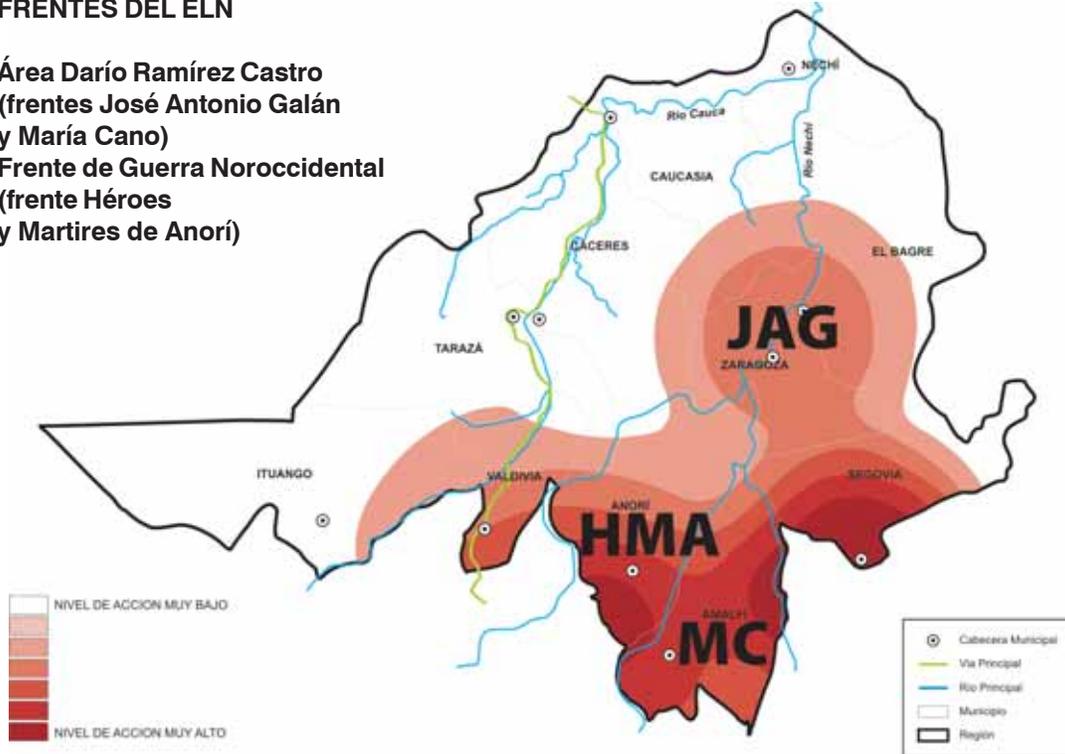
En los meses previos a la realización de los comicios electorales del 26 de octubre de 1997, la guerrilla presionó la renuncia de un conjunto importante de candidatos a los concejos y alcaldías. El sabotaje a las elecciones se produce en las localidades donde los grupos de autodefensa, median-



PRESENCIA ACTIVA DEL ELN 1998 - 2005

FRENTES DEL ELN

Área Darío Ramírez Castro
(frentes José Antonio Galán
y María Cano)
Frente de Guerra Noroccidental
(frente Héroes
y Martires de Anorí)



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República
Fuente de información: Das
Fuente base cartográfica: IGAC

te el recurso a la violencia masiva, venían disputándole a la insurgencia el dominio de la zona. Al presionar la renuncia de los candidatos, la subversión buscó impedir que estructuras de las autodefensas influenciaran en los gobiernos locales.

Es importante tener en cuenta que la acción de las autodefensas en el Bajo Cauca se inscribe en un plan más amplio de dominio territorial, funcional a la dinámica del narcotráfico, que busca encadenar zonas de producción de coca y resguardar las rutas de transporte y los puertos de exportación del alcaide.

Entre 1997 y 2001, se registraron masacres, que se explican por la lógica de la expansión de los grupos de autodefensa, inscrita en el propósito de crear un corredor que comunique las regiones de Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo, para que una vez se consiga el dominio sobre el norte del país, se inicien las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en escenarios de producción de coca en el sur y el oriente.

Con la creación de las AUC en 1997, el objetivo descrito se lle-

va a la práctica a través de las estructuras que integran la federación de grupos regionales. De aquí que el grupo de Puerto Berrío, financiado por Félix Gaitán Cendales, un narcotraficante santandereano con importantes negocios en Bucaramanga, Piedecuesta, Puerto Parra, Campo Capote y Puerto Berrío, se diera a la tarea de ampliar su presencia territorial. El grupo coordinó acciones con el grupo de *Doble Cero*²², que

²² *Doble Cero* encabezaba la estructura que se conoció después como bloque *Metro*, desarticulada a raíz del enfrentamiento sostenido contra otra estructura de las autodefensas, el bloque *Cacique Nutibara* en 2003. *Doble Cero* fue asesinado en Santa Marta en mayo de 2004.





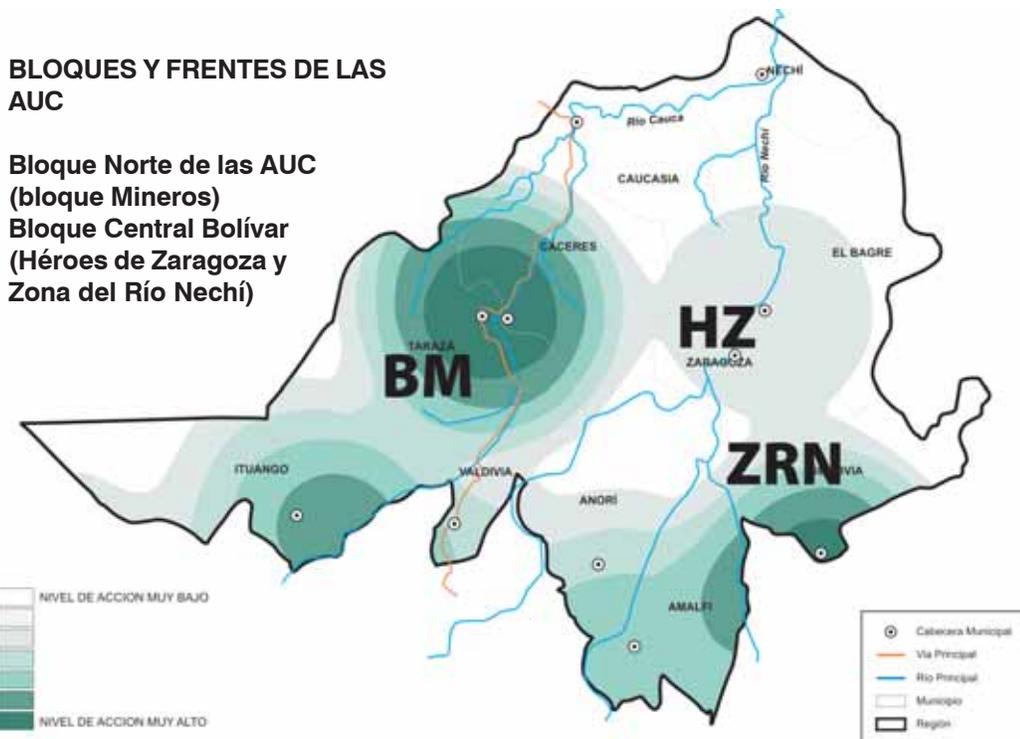
contaba con influencia en la zona de Porce, Barbosa y Santo Domingo, Antioquia. Durante 1997, 1998 y 1999, este grupo estuvo muy activo y estableció alianzas con dueños de algunas minas en Amalfi. Allí las minas de La Viborita y El Naranjal, arrebatadas a sus propietarios originales y a la explotación comunitaria, sirvieron de base y fuente de financiación a grupos de autodefensas. Gaitán Cendales perdió todo protagonismo, con lo cual se fortaleció la organización de *Doble Cero*, que logró incursionar en Segovia y se definieron una serie de alianzas con

grupos locales de Cáceres, Tarazá y Caucasia. El dominio estricto de esta agrupación se limitó a una zona plana entre Caucasia y el Bagre, y entre Caucasia y Tarazá.

El Bajo Cauca fue uno de los principales objetivos del proyecto de expansión territorial de las AUC y el bloque Mineros el encargado de su consolidación. Estando bajo el mando de Ramiro Vanoy, cubrió parte del Nordeste, el Bajo Cauca y el Norte antioqueño y logró también extenderse hacia el sur de Bolívar. Informantes de la DEA aseguran que “Cuco”

Vanoy se inició como esmeraldero en la zona de Muzo (Boyacá); también señalan que trabajó para Pablo Escobar y que posteriormente organizó un “ejército privado” de cerca de 400 integrantes que, a principios de los noventa, entró a formar parte de las Accu. Inicialmente, su área de acción era Jamundí (Valle), pero luego se trasladó a Antioquia, donde tuvo influencia principalmente en Caucasia y Tarazá. Es uno de los comandantes de las AUC que llegó a concentrar mayores recursos económicos provenientes del narcotráfico.

PRESENCIA ACTIVA DE LAS AUTODEFENSAS 1998 - 2005



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
 Vicepresidencia de la República
 Fuente de información: Das
 Fuente base cartográfica: IGAC



Al igual que Diego Murillo Bejarano, alias "Don Berna", Vanoy hizo parte del grupo ilegal *Los Pepes*, que se dedicó a combatir con las armas al jefe del Cartel de Medellín. Tras la muerte de Escobar, se asoció con Alejandro Bernal Madrigal, alias *Juvenal*, e inició la exportación de grandes cantidades de droga hacia México y Estados Unidos. Los informes de las autoridades colombianas y norteamericanas afirman que la mayoría de esos cargamentos salían desde una pista clandestina ubicada en Caucasia, territorio bajo su dominio. Según algunas versiones, en 2002 Carlos Castaño, con el beneplácito de su hermano Vicente, le vendió a "Cuco" Vanoy la franquicia del bloque Mineros y lo transformó en un influyente comandante de las AUC.

En los municipios en los cuales el bloque Mineros contó con presencia, se calculan que existen alrededor de 4.000 hectáreas de

coca, que representan el 3% del total nacional, una estimación moderada si se tiene en cuenta que cubrió municipios del sur de Bolívar como San Pablo, así como Ituango, Tarazá, El Bagre, Remedios, Zaragoza, Cáceres y Anorí, donde la superficie cultivada es significativa. En estos municipios, la destrucción de laboratorios para el procesamiento de droga ha sido importante, lo cual pone al descubierto la relación muy estrecha entre los grupos de autodefensa y las actividades del narcotráfico²³.

Los municipios bajo influencia del bloque Mineros, también registraron la presencia el bloque Central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, conocido como *Macaco*, estructura que controló cultivos de coca de gran extensión y se apropió a sangre y fuego de cerca de 50 minas de oro. En los municipios con presencia de este grupo, se contaron alrededor de 2.716 hectáreas sembradas con coca, sobretodo en Tarazá, El

Bagre, Remedios, Zaragoza, Cáceres y Segovia, aunque no sobra advertir que parte de las mismas se encontraban bajo el control de los hombres del bloque Mineros. Luego de producirse la desmovilización de *Macaco* en Santuario (Risarcaldá) en diciembre de 2005, el comandante del bloque Central Bolívar se estableció en una finca de su propiedad ubicada en la vereda Piamonte de Cáceres, donde la organización bajo su mando ejerció un férreo control sobre la población.

En una de las mayores desmovilizaciones registradas en el proceso de paz con las AUC, alrededor de 2.500 integrantes del bloque Mineros hicieron dejación de sus armas, en un acto llevado a cabo el 20 de enero de 2006 en una finca del municipio de Tarazá, con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y los jefes del grupo ilegal, incluido Ramiro "Cuco" Vanoy.

COMBATES POR INICIATIVA DE LAS FUERZAS MILITARES Y ACCIONAR ARMADO DE LOS GRUPOS IRREGULARES

Durante los primeros años de la década de los noventa, las acciones de la confrontación también estuvieron protagonizadas por grupos de autodefensa que pretendían imponerse mediante el recurso del terror.

Se puede hacer una periodización de la confrontación armada desde la década de los noventa a través de tres fases: 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2005. Las diferencias entre estos tres períodos están dadas

²³ Tarazá ha sido otro escenario importante de producción de coca en el Bajo Cauca. El corazón de la actividad es La Caucana, un corregimiento que tiene 22 barrios y cerca de 4.000 habitantes permanentes y 3.000 flotantes. Por las fumigaciones, la actividad coquera ha decaído, las estaciones de gasolina pasaron de cinco a dos. Y de los 30 prostíbulos en los que laboraban de 150 a 200 mujeres hoy sólo quedan seis establecimientos con no más de 35 trabajadoras. Los dos indicadores son muestra de la decadencia de la actividad ilegal: la gasolina representa un insumo esencial para el procesamiento de la coca y las prostitutas, el destino de buena parte del dinero de los raspachines. La situación es tan crítica como la que vino después del domingo de Resurrección de 2001, cuando las Farc asaltaron el pueblo, mataron a 28 personas, saquearon los negocios y se llevaron a unas 600 mulas. Pero la ambición de una fortuna rápida atrajo nuevamente a los raspachines.





Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

por los quiebres que se presentan en las tendencias de los combates que parten de la iniciativa de las Fuerzas Militares y las acciones bélicas realizadas por los grupos armados irregulares²⁴. En cada uno de estos tres períodos, las dinámicas de la confrontación generaron patrones geográficos de concentración de la actividad armada, que se explican en función de los intereses de sus protagonistas.

Tal y como se observa en la evidencia estadística contenida en los gráficos adjuntos, el primer periodo de la confrontación, que se extiende entre 1991 y 1995, se caracterizó por la coexistencia del ELN y las Farc que demuestran, sobre todo en la primera de estas guerrillas, una elevada capacidad de actuación armada conseguida a lo largo de décadas de presencia en la región. Los grupos de autodefensa local se encontraban consolidados mientras los grupos grandes provenientes de otras regiones intentaban ingresar para disputarle a la guerrilla sus posiciones. En todo el territorio, prevaleció el patrón tradicional de actuación de los grupos guerrilleros en las comunidades urbanas y rurales: protagonizando contactos armados con el Ejército, sabotajes, hostigamientos, emboscadas a unidades militares, asaltos a entidades, piratería terrestre, retenes ilegales y ataques a poblaciones.

²⁴ La intensidad de la confrontación armada se determinó de acuerdo con el número de contactos por iniciativa de la Fuerza Pública y de acciones perpetradas por la guerrilla, que se dividen en tres: i) las acciones orientadas contra la Fuerza Pública, es decir las emboscadas, los ataques a instalaciones militares, los hostigamientos y ataques a poblaciones; ii) destrucción de infraestructura y iii) los actos con objetivos económicos, es decir las acciones de piratería terrestre y los asaltos a entidades públicas y privadas.

Las guerrillas son responsables de la realización de 170 acciones armadas, 92 de las cuales por el ELN, 35 por las Farc, 16 por otras guerrillas y 27 por grupos guerrilleros no identificados. Los años de mayor actividad son 1991 y 1992 en total correspondencia con los momentos de escalamiento de la confrontación a nivel nacional. Las acciones más recurrentes son los ataques contra la infraestructura con 86, seguidos por las que se dirigen contra la Fuerza Pública, hostigamientos, ataques contra instalaciones y emboscadas que suman 49, los ataques contra poblaciones 7 y a entidades 13, los casos de piratería terrestre con 10 y los retenes ilegales con 5. La distribución espacial de estas acciones revela la presencia muy activa del ELN en municipios donde esta guerrilla se implantó desde tiempo atrás, razón por la cual más del 38% de los hechos protagonizados por la subversión se concentran en Segovia. La actividad guerrillera también se concentró en forma importante en los municipios de Zaragoza, Valdivia, El Bague y Tarazá.

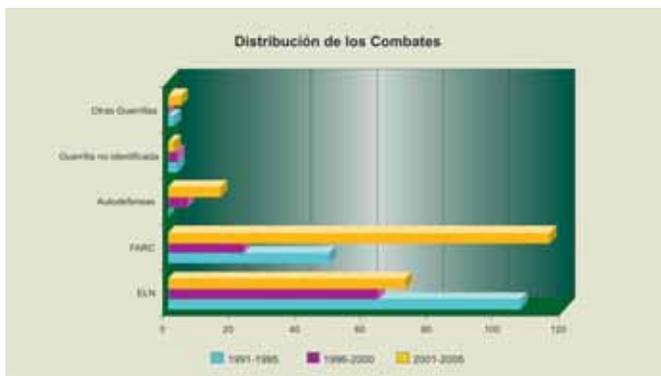
Durante este período, se registraron en el conjunto del Bajo Cauca y su entorno 161 combates entre la Fuerza Pública y los grupos irregulares. El ELN fue el principal objetivo de la acción militar con 107 contactos, en segundo lugar figuran las Farc con 49 y por último grupos no identificados con 5. La evidencia estadística que se presenta adjunta permite observar que los años con mayor número de combates son 1993 y 1994 y que en el primero de estos años, en virtud de la llamada *guerra integral*



que sobrevino al fracaso de los diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar durante la primera parte de la administración Gaviria, la relación con las acciones de la guerrilla se invierte. En efecto, a partir de 1993, los combates comenzaron a superar las acciones de los grupos guerrilleros, pese a que en 1995 mostraron una disminución. Los combates dirigidos a debilitar al ELN se libraron principalmente en Segovia y El Bagre, donde la organización detentaba su mayor poderío y donde ocurrieron cerca del 40% de los contactos armados con la Fuerza Pública. El otro 40% de los combates se distribuyeron entre Caucasia, Zaragoza, Nechí y Tarazá. Aunque el promedio de muerte en combate por número de enfrentamientos armados desarrollados por las Fuerzas Militares contra las Farc y el ELN fueron prácticamente iguales, 1,07 y 1,06 respectivamente; sin embargo el número absoluto de muertes en combate resultantes de las operaciones militares

contra estas guerrillas fueron más numerosas en el ELN con 115 frente a las 52 que sufrieron las Farc.

Durante los primeros años de la década de los noventa, las acciones de la confrontación también estuvieron protagonizadas por grupos de autodefensa, que pretendían imponerse mediante el recurso del terror. En 1994, en el mes de marzo un grupo de presuntos integrantes de las autodefensas incursionó en la vereda los Chorrillos de Valdivia y cometió una masacre. En 1995, se produjo uno de los hechos más graves, en marzo seis frentes de las Farc se unieron para incursionar en el casco urbano de Ituango, atacar el puesto de Policía y saquear la Caja Agraria y el Banco Cafetero. La incursión de la guerrilla dejó siete personas muertas, el alcalde y el personero fueron secuestrados, las pérdidas materiales ascendieron a cuatrocientos millones de pesos y la población quedó sumida en el pánico. Después de la toma, y ante la presión del Ejército, las columnas se replegaron hacia las veredas del Nudo del Paramillo y hasta allí llegaron las tropas militares. Los combates se prolongaron durante semanas y la presencia del Ejército se mantuvo por varios meses.



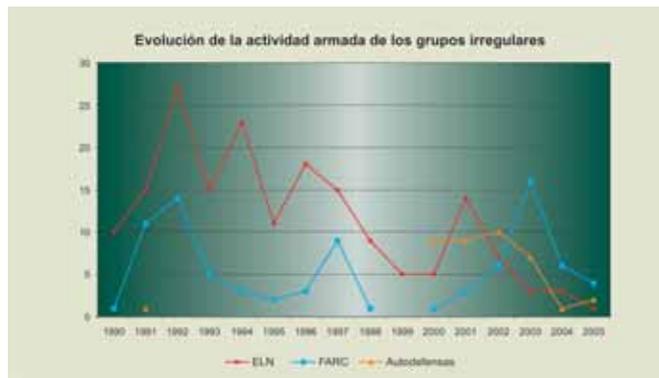
Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

En el período 1996-2000, pese a que se mantuvo el mayor protagonismo armado en cabeza del ELN y que esta guerrilla siguió siendo la más combatida por la Fuerza Pública, se establece una clara diferencia con el período anterior, por cuanto se produjo una disminución en la intensidad de la confrontación, hecho que se explica tanto por la caída en los combates liderados por la Fuerza Pública como por las acciones armadas de los grupos subversivos. Por su parte, los grupos de autodefensa continúan avanzando, tras haber logrado el dominio de la franja del territorio ubicado entre Ituango, Valdivia, Anorí y Segovia. Este período estuvo caracterizado por las frecuentes muertes selectivas a manos de hombres encapuchados, las incursiones de grupos no identificados en las veredas, los recorridos de *escuadrones de la muerte* por las calles de las poblaciones, las masacres y las acciones violentas atribuidas a estructuras de los grupos de autodefensas.





Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

Las acciones protagonizadas por los grupos irregulares fueron 101, de las cuales el ELN realizó 58, las Farc 14, las autodefensas 9 y grupos no identificados 20. La acción más recurrente continúa siendo el sabotaje contra la infraestructura con 49 hechos, que representan casi la mitad de los que se registraron en el período anterior. Los hostigamientos constituyen la segunda acción más frecuente que, junto con los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública y las emboscadas, suman en total 29 hechos. Otras acciones dirigidas contra la población como actos de piratería, retenes ilegales, asaltos a entidades y ataques a poblaciones suman 17 hechos.

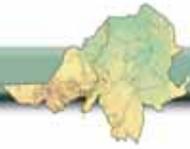
Es importante destacar que en este periodo se producen por primera vez enfrentamientos directos entre las autodefensas y la guerrilla. Durante 2000, las Accu, que desde el año anterior habían instalado bases en el corregimiento de Santa Rita de Ituango, realizaron diferentes incursiones a las veredas colindantes, destruyendo los caseríos y desplazando a los moradores del Cedral y Santa Lucía. En respuesta, las Farc, a través del frente 36, atacaron en el mes de julio a las Accu acantonadas en Santa Rita, con un saldo de 21 de sus integrantes muertos. De los 6 enfrentamientos que se presentaron en 2000, también cabe mencionar el que se registró el 25 de julio, en zona rural de El Bagre, donde resultaron muertos 10 insurgentes de las Farc y un integrante de las autodefensas; así como los que tuvieron lugar el 29 y 30 de octubre, en las

veredas El Aporriado y Cañaverál de Segovia, entre miembros de las autodefensas y subversivos del ELN, que dejaron un saldo de 8 muertos.

Durante este período, se registró una caída en los combates de la Fuerza Pública contra los grupos irregulares y pese a ello, el ELN siguió siendo el grupo más combatido con 84 contactos, seguido por las Farc con 19 y los grupos de autodefensa con 6. El año con mayor número de combates es 1996; con posterioridad, la tendencia es descendente y llega a su nivel más bajo en 1998. En 1999, se produce un repunte en los combates, que se dirigen ante todo contra el ELN, pero no se logra sostener por cuanto en 2000 la iniciativa militar vuelve a caer. La distribución geográfica de los combates muestra cómo se siguen dirigiendo principalmente hacia zonas de alta influencia del ELN. El énfasis de la iniciativa militar está puesto sobre cuatro municipios: Anorí, Segovia, Valdivia y Amalfi, donde ocurre el 60% de los combates.

En cuanto a la distribución geográfica de las acciones armadas de la guerrilla, ésta presenta modificaciones con respecto al periodo anterior, que se pueden resumir como una caída de la acción subversiva en los municipios del Bajo Cauca, mientras se incrementaron las hostilidades en los municipios correspondientes al entorno. En efecto, Anorí sobresale como el principal escenario de ocurrencia de acciones armadas, mientras que Segovia pasa a un segundo lugar. Al mismo tiempo, en el





territorio de Amalfi e Ituango aumentan los hechos. En sentido contrario, se observa una disminución de la presión guerrillera en Tarazá, Zaragoza, El Bagre, Caucaasia y Cáceres.

En este período, se generó un nuevo reordenamiento del territorio en función de los cambios experimentados, que permite describir la confrontación a través de ejes espaciales, donde se encuentran de manera particular sus protagonistas. Para 1998, las zonas del Norte medio y lejano estaban completamente cubiertas por los grupos de autodefensa y por lo tanto el Bajo Cauca registraba el nivel mínimo de violencia. Los efectos de la presencia de estos grupos sobre los demás actores de la confrontación armada son evidentes. De las Farc, se registraba actividad armada por parte de los frentes 36 y 4 en la zona oriental, y los frentes 18 y 58 en las selvas de Ituango. Del ELN, la compañía Héroes de Anori permaneció en sus territorios tradicionales en límites con el Nordeste, pero disminuyó con-

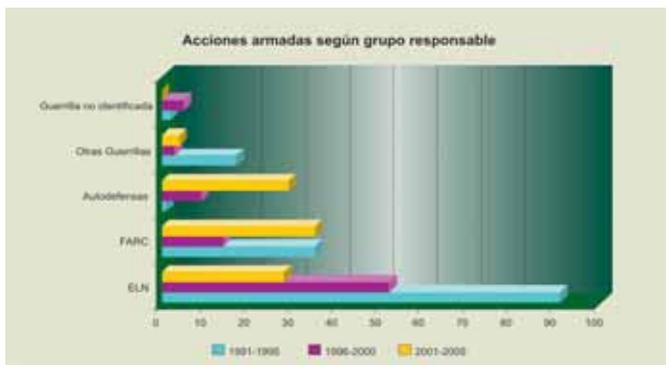


Rio Cauca - Poblacion de Caucaasia (Foto: VIZTAZ)

siderablemente su accionar, y el frente Compañero Tomás tuvo alguna presencia en las selvas de Ituango. El Ejército, por su parte, mantuvo las tropas de la IV Brigada actuando principalmente en los territorios de Valdivia e Ituango.

En el período 2001-2005, la dinámica de la confrontación cambia por completo. La tendencia ascendente en la intensidad de la confrontación se produce fundamentalmente por los combates liderados por las Fuerzas Milita-

res, que comenzaron a dirigirse principalmente contra las Farc, guerrilla que a partir de 2003 asumió un mayor protagonismo armado que el ELN. En este período, la actividad armada de los grupos de autodefensa registraba su nivel más elevado, comparable con la que realizaba el ELN, aunque es preciso decir que las acciones de todos los grupos irregulares muestran una clara tendencia descendente entre 2004 y 2005. Las autodefensas que anteriormente habían dirigido sus acciones principalmente contra



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República



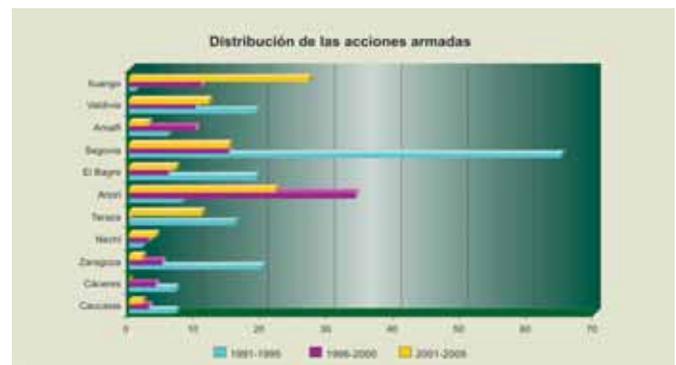
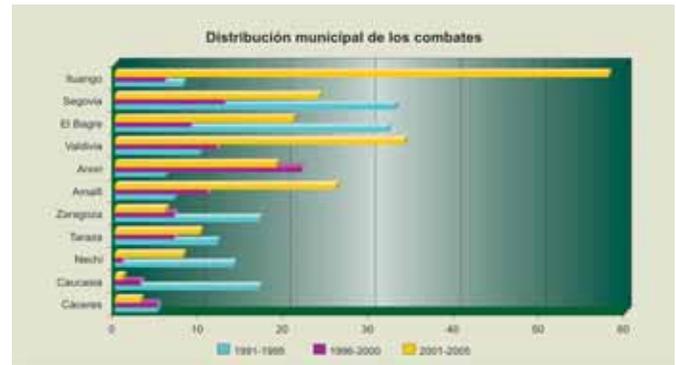


civiles inermes, en ese momento se enfrentaron directamente contra estructuras de la guerrilla, estableciendo una diferencia notable con los períodos anteriores.

Se advierte también en la evidencia que se presenta en los gráficos adjuntos que a partir de 2001, las Farc registran una tendencia ascendente en sus acciones bélicas, que le permite en 2003 alcanzar el nivel más elevado de actividad armada, para luego comenzar a descender en 2004. El ELN que en 2001 muestra un repunte de su accionar armado, a partir de 2003 registra los niveles más bajos de actividad con una sola acción en 2005. Las autodefensas que en este período alcanzan su mayor actuación armada, entre 2001 y 2002 registran el mayor número de enfrentamientos con los grupos guerrilleros, para luego comenzar a disminuir y caer casi por completo en 2005.

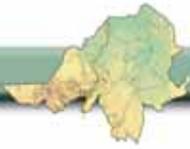
En este período, se registró prácticamente el mismo número de acciones que en el anterior, con 105 acciones, sin embargo la distribución según autores es diferente. En efecto, los cambios se expresan en que las Farc mostró el mayor protagonismo, con 35 acciones, en tanto que el ELN, con 28, registró su nivel más bajo. La disminución de la iniciativa armada de la guerrilla se expresa en la caída de las acciones de sabotaje con 23, de los hostigamientos contra la Fuerza Pública con 10 y de los asaltos a entidades con 4. Se advierte un repunte en los retenes ilegales con 14, en las emboscadas con 10 y en los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública con 8. Permanecen constantes con respecto al período anterior las acciones de piratería terrestre con 6 y los ataques a poblaciones con 2 casos. Es importante tener en cuenta que en este periodo, se producen 28 enfrentamientos entre las autodefensas y los grupos guerrilleros, siendo difícil establecer cual de los dos tuvo la iniciativa.

De los 9 enfrentamientos registrados en 2001, cabe destacar los de mayor magnitud en cuanto al número de víctimas. En enero, en la vereda Santa Rita de Ituango, se presentaron enfrentamientos entre integrantes del frente José María Córdoba de las Farc e integrantes de las AUC, que produjeron 20



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

muerdos, luego en febrero fue hallada una fosa común con 30 integrantes de las AUC; en abril, en zona rural de Tarazá, se presentaron enfrentamientos entre integrantes de las AUC y las Farc por el dominio de la zona y posteriormente el mismo grupo insurgente incursionó en la inspección La Caucana, donde asesinaron a 19 personas; entre julio y septiembre, los enfrentamientos librados en zona rural de Ituango, Pascuita y La Granja, sitios El Filo de La Aurora y Llano del Indio, entre miembros de las AUC y subversivos de las Farc produjeron 32 muertos; adicionalmente, en el perímetro urbano, miembros de las AUC mantuvieron sitiada la población; en octubre, en el corregimiento Puerto López de El Bague, miembros de las AUC se enfrentaron contra integrantes del frente José Antonio Galán del ELN, de los cuales 20 resultaron muertos; en diciembre, en un enfrentamiento que se presentó en el corregimiento La Unión de Tarazá entre integrantes de las AUC y subversivos de los frentes 18 y 58 de las Farc, resultaron muertos 25 particulares.



En 2002, aunque los enfrentamientos entre las organizaciones ilegales se incrementaron con respecto al año anterior, la magnitud en términos de víctimas es mucho menor. Cabe mencionar dos de los diez contactos registrados: el primer enfrentamiento registrado en febrero, en la vereda Solano de Anorí entre integrantes de las AUC y subversivos del ELN produjo la muerte de 8 integrantes del grupo guerrillero; el segundo se produjo en septiembre, en la vereda La Resbalosa de Tarazá, cuando integrantes de las AUC se enfrentaron con subversivos del frente 18 de las Farc, con saldo de 50 víctimas, sumando las muertes de ambas agrupaciones.

Hacia finales de 2002, el Gobierno nacional entabló aproximaciones de paz con las AUC, encaminadas a su desmovilización y posterior reinserción a la vida civil. En este sentido, el 29 de noviembre anunciaron el cese de hostilidades y el 15 de julio de 2003 firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito

“para contribuir a la paz de Colombia a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento de la fuerza en manos del Estado”, proceso que implicó la reconfiguración de la confrontación armada, debido a la concentración de los integrantes de las AUC en los alrededores de Tierralta, a la ofensiva adelantada por el Ejército Nacional en el piedemonte del Nudo de Paramillo y por los intentos de las Farc de empezar a recuperar los espacios dejados por las autodefensas.

En 2003, se produjeron 6 enfrentamientos, entre los cuales se destaca por la magnitud que alcanza, el ocurrido en mayo, en el corregimiento La Caucana de Tarazá, sector El Chuscal, entre estructuras de las AUC y las Farc, arrojando como resultado 25 guerrilleros y 7 integrantes de las autodefensas muertos. En 2004, se registró un enfrentamiento en la vereda Santa Rita de Ituango, entre estructuras de las Farc y las AUC sin consecuencias. En 2005, se produjeron dos enfrentamientos, destacándose el que ocurrió en agosto en el corregimiento Liberia de Anorí, entre estructuras del bloque Central Bolívar y el ELN, resultando muertos 6 guerrilleros.



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Boletín del Das Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

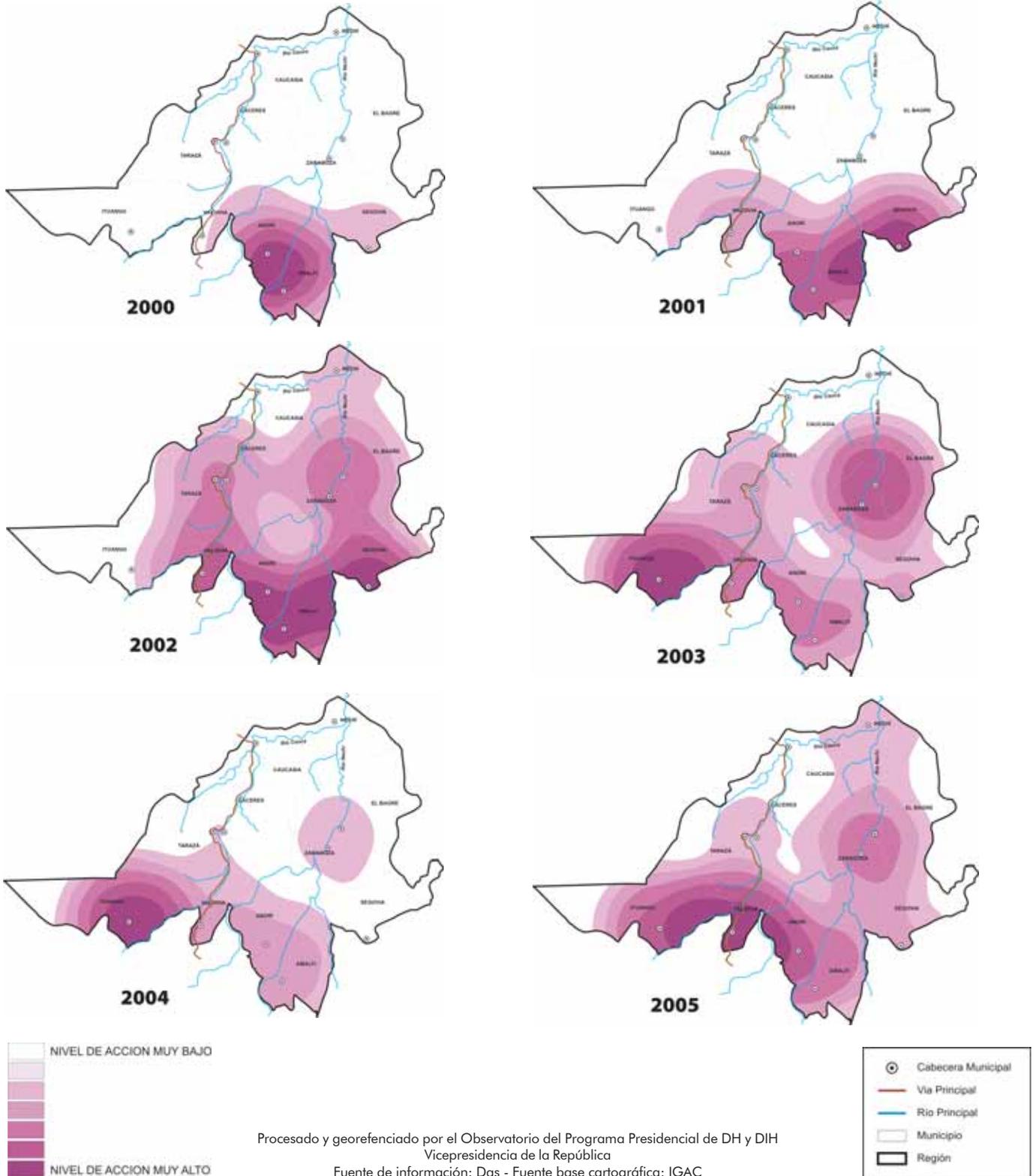
En cuanto a la capacidad de combate de las Fuerzas Militares, es importante destacar su crecimiento, así como la mayor letalidad expresada en el incremento en las muertes de integrantes de los grupos irregulares en los contactos armados respecto de los índices de los períodos anteriores, 1.07 en el primer lustro, 1.13 en el segundo y 1.31 en el tercero. En 2003, las mayores capacidades con que cuentan las Fuerzas Militares se expresan en el número de combates que supera los niveles registrados en los ocho años anteriores, en 2004, se registra el pico operacional con 79 combates y en 2005, disminuyen a 59.

Entre 2001 y 2005, se llevaron a cabo 210 combates con un saldo de 276 integrantes de grupos al margen de la ley muertos. La mayor presión militar se ejerció contra las Farc con 116 combates, en segundo lugar contra el ELN con 72 y en tercer lugar contra las autodefensas con 16. Si se tiene en cuenta el número de bajas por combate, el grupo





COMBATES POR INICIATIVA DE LA FUERZA PUBLICA 2000-2005





relativamente más impactado es el de las autodefensas con 1.43, seguido por el ELN con 1.41 y en tercer lugar, las Farc con 1.25.

Cabe mencionar algunos de los combates en los cuales los grupos al margen de la ley fueron fuertemente impactados. En 2002, en el mes de septiembre, se produjo un combate entre unidades del Ejército y miembros de las AUC en la vereda Cristalina de Anorí con un saldo de 4 bajas en el grupo ilegal y abundante material de guerra incautado. En el mismo año, 6 integrantes del ELN fueron muertos en dos combates, el primero registrado en mayo en el sector Chorrolindo de Segovia y el segundo en octubre en la vereda El Cedro de Valdivia.

En agosto de 2003, el Ejército ingresó a la cabecera municipal de Ituango, lo que provocó una serie de atentados por parte de la guerrilla - en noviembre, se presentó un atentado en el casco urbano con un balón bomba-. El posicionamiento de la Fuerza Pública en la cabecera obligó al repliegue de los integrantes del frente 18 de las Farc hacia las zonas rurales, donde restringieron la salida de los pobladores hacia el casco urbano, igualmente sembraron minas en los caminos, senderos, trochas y espacios abiertos para contener el avance del Ejército y reforzaron su inteligencia en la cabecera mediante milicianos para identificar a las personas que estarían colaborando con las autoridades y realizar extorsiones.

En 2004, año en que se registró el mayor esfuerzo militar contra los grupos armados irregulares, dos combates causaron un elevado número de bajas: el primero se produjo en el mes de abril, en el sitio Arenas Blancas de Amalfi, entre unidades del Ejército e integrantes del ELN, de los cuales 7 resultaron muertos; el segundo, se produjo en noviembre en área rural de Cáceres, entre unidades del Ejército y miembros de las AUC, de los cuales 7 fueron dados de baja. En mayo, el Ejército desplegó la operación "Motilón", con la finalidad de debilitar a las Farc en el área rural de Ituango, acciones que obligaron a esta guerrilla a internarse en las partes altas de la cordillera. Una vez cesaron las opera-

ciones del Ejército, la guerrilla retornó a las veredas y corregimientos, castigando la acogida brindada por los pobladores a la Fuerza Pública.

En 2005, dos combates muestran la intensidad alcanzada en las operaciones militares: el primero se registró en mayo en las veredas El Cedral Alto y Bajo del Inglés de Ituango, entre unidades del Ejército e integrantes del frente 18 de las Farc, de los cuales 11 fueron dados de baja, entre ellos alias *Petaco*, quien era el segundo comandante de la estructura armada; el segundo en octubre, en la vereda Cañaveral de Segovia, entre unidades del Ejército e integrantes del ELN, de los cuales 9 fueron muertos en combate. En septiembre de este año, tropas de la Cuarta Brigada propinaron un duro golpe al bloque noroccidental de las Farc, al capturar a Martín Francisco Puerta Henao, quien estaba al mando de la columna móvil mixta del Bajo Cauca y era el segundo comandante del frente 36. De acuerdo con las autoridades, *Argemiro* o *El Zurdo*, como se le conocía en la región, fue responsable del secuestro y asesinato del párroco de la vereda Raudal Viejo del municipio de Valdivia, Padre Cesar Darío Peña, perteneciente a la Diócesis de Santa Rosa de Osos; y de la masacre de 14 campesinos en el sector del corregimiento de Puerto Raudal el 25 de agosto de 2005, entre otros delitos.

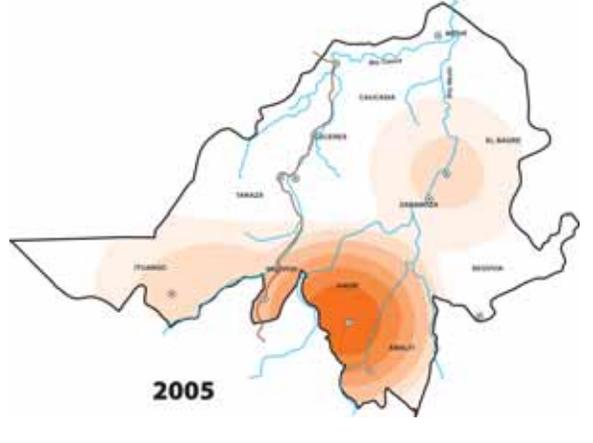
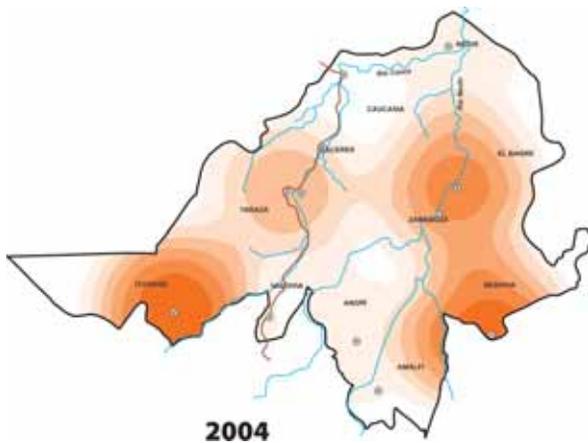
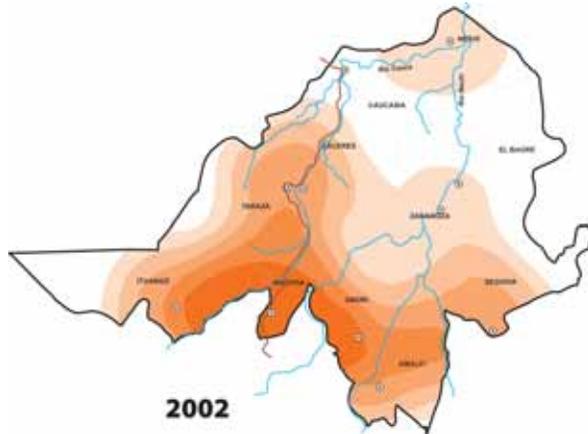
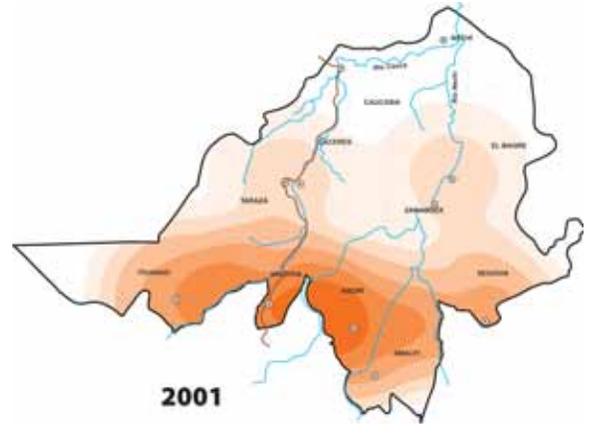
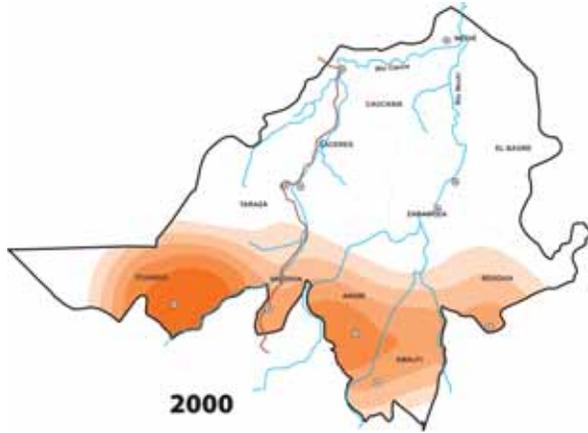


Rio Cauca (Población de El Bagre)





ACCIONES ARMADAS DE LOS GRUPOS IRREGULARES 2000-2005



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República
Fuente de información: Das - Fuente base cartográfica: IGAC





La dinámica de la confrontación en este último periodo muestra los avances en el propósito de lograr el restablecimiento del orden público como condición indispensable para asegurar el control eficaz del territorio. La iniciativa militar duplica las acciones que realizan los grupos ilegales y en el caso particular de la guerrilla, supera cuatro veces los hechos realizados por las Farc y tres veces los cometidos por el ELN en este lap-

so. En este período, se generó un nuevo reordenamiento de la actividad armada que permite identificar el principal escenario de la confrontación, tal y como se observa en la serie de mapas adjunta, en la extensa franja de territorio que se ubica entre Ituango, Valdivia, Anorí, Amalfi y Segovia. En todos estos municipios, con excepción de Anorí, la acción de la Fuerza Pública predomina sobre los hechos protagonizados por los

grupos irregulares. La superioridad de los combates de las Fuerzas Militares sobre los grupos al margen de la ley también se advierte principalmente en El Bagre y de manera más discreta en Nechí, Zaragoza y Cáceres. Fuera del caso de Anorí antes mencionado, Tarazá y Caucajía son los municipios donde los combates estuvieron levemente por debajo de las acciones de los grupos armados irregulares.

IMPACTO HUMANITARIO DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA

El desplazamiento de la población es el resultado de la dinámica de la confrontación armada y el proceso de violencia que se presenta en la región.

Dinámica del homicidio

Si siguiendo el estudio sobre el Occidente antioqueño²⁵, en el presente documento, se busca establecer la relación entre la evolución de la confrontación y las condiciones estratégicas en las que ocurre y el recurso a la violencia masiva y a la violencia selectiva. Con la información disponible, no es posible establecer si el incremento del homicidio antecede o sigue la irrupción de las organizaciones guerrilleras, no obstante lo que sí es claro durante los años ochenta y en la primera mitad de la década de los noventa, es que la tasa de la región se ubicó por encima de la tasa nacional, mientras que en la segunda, excepto en 1997, estu-

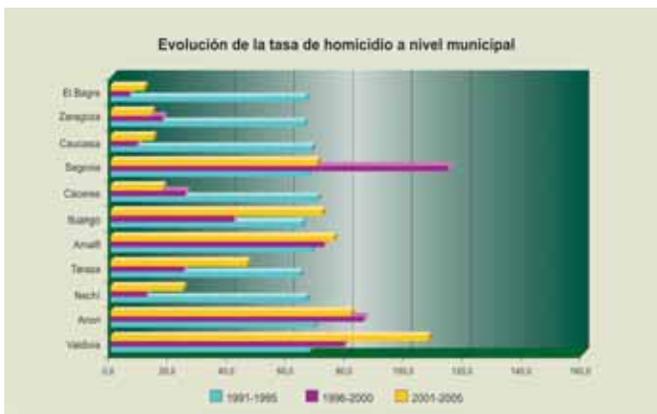
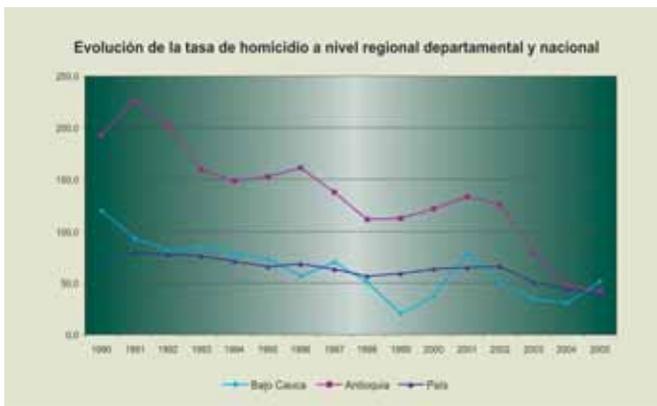


Tejido Artesanal - Población de Caucajía (Foto: VIZTAZ)

²⁵ *Panorama actual del Occidente de Antioquia*, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Bogotá, Octubre de 2006.



vo por debajo del promedio nacional. Posteriormente, los índices siguen siendo inferiores a los del país, menos en 2001, cuando se produjo un brusco repunte. A partir de 2002, la tasa de homicidio comienza a descender, pero en 2005 vuelve al nivel registrado en 2002. Como también se puede observar en los gráficos adjuntos, la tasa regional en 2005 vuelve a ubicarse por encima de la tasa nacional y por primera vez supera la tasa departamental, que venía registrando desde 2002 una tendencia descendente.



Fuente: Policía Nacional
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República

Ya hacia finales de los años ochenta, la naturaleza de las acciones que venían ocurriendo en Puerto Valdivia, uno de los principales epicentros de la confrontación, evidenciaba la irrupción de las autodefensas y los esfuerzos de la guerrilla por contenerlo: en 1988, en el mes de enero, siete personas fueron asesinadas por un grupo armado; en

marzo, fuerzas combinadas de las Farc y el ELN asaltaron la población; en octubre, en una nueva acción, la guerrilla dirigió sus ataques contra la infraestructura; en diciembre, siete personas fueron asesinadas por un grupo desconocido y en enero de 1989, un grupo de encapuchados asesinó al inspector de Policía²⁶.

En la década de los noventa, el avance de las Accu estuvo acompañado del recurso a la violencia para garantizar territorios de retaguardia, apropiarse de suelos fértiles, ampliar la frontera agrícola y debilitar el poder adquirido por las Farc (en este contexto es pertinente señalar que el EPL se desmovilizó en 1991 y el ELN se fortaleció en el sur de Bolívar), golpeando especialmente a la supuesta base social que le respaldaba. Es evidente que el objeto de la disputa entre la guerrilla y las autodefensas, además de estar ligado a la obtención de recursos, se relaciona con la existencia de corredores importantes para la comunicación y logística de estos grupos, el primero entre el Bajo Cauca, el norte y el Urabá antioqueño (municipios de la Cuenca del Cauca, Cáceres, Tarazá, Itango y Valdivia); el segundo que une el Bajo Cauca con las llanuras de Córdoba y el Alto Sinú y San Jorge (municipios de Caucaia y Nechí); y el último que cubre el Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño (municipios de Anorí, Amalfi, Segovia, Zaragoza y El Bagre).

El primer corredor fue objeto de una fuerte disputa con los grupos de autodefensa con presencia en Tarazá e Itango. En el segundo corredor, se impuso el dominio de los grupos de autodefensa. El tercero une tanto el Nordeste con el sur de Bolívar y con el norte antioqueño y por ser de paso frecuente de la guerrilla, registró una fuerte arremetida de los grupos de autodefensa. Tal y como se observa en los mapas que se presentaron en la primera sección, que dan cuenta de la presencia activa de las organizaciones irregulares, en la margen izquierda del río Cauca y en el límite sur de la región con el departamento, han actuado las Farc, en tanto que el ELN se ha inclinado hacia la cuenca del río Nechí.

²⁶ María Teresa Uribe de Hincapié et.al, Desplazamiento forzado en Antioquia.



La tasa de homicidio es particularmente elevada en la región durante la primera mitad de la década de los noventa y cada uno de los municipios supera el promedio del país correspondiente a 74 homicidios por cien mil habitantes (hpch), con tasas que oscilan entre 79 y 86. En este periodo, se destacan por la intensidad que adquiere la violencia los municipios pertenecientes al primer corredor (Cáceres), al segundo (Caucasia) y al tercero (Anorí, Amalfi y Segovia).

En el período 1996-2000, pese a que la reducción de la tasa de homicidio regional con respecto al período anterior es importante, pasando de 82 a 46, los municipios de Segovia, Anorí, Amalfi, Valdivia e Ituango que hacen parte de la franja de entorno del Bajo Cauca, muestran índices superiores al promedio nacional de 62 hpch. Es importante señalar que en 1996, se establece una importante inflexión en la dinámica de la confrontación,

que anteriormente se había caracterizado por el mayor protagonismo armado de la guerrilla, los combates con el Ejército y las esporádicas incursiones de las Accu, pasando a una fase en la cual el accionar de estas últimas se expresa en el elevado número de asesinatos, como se observa en los gráficos adjuntos²⁷. En abril de ese año en Valdivia, un grupo de hombres armados sacó de sus casas a 6 personas, 4 de las cuales fueron decapitadas y las 2 restantes desaparecieron, posteriormente en la vereda Juntas, un dirigente político del partido comunista fue asesinado. También en abril, en el casco urbano de Segovia, desconocidos asesinaron a 8 personas de los barrios El Paraíso, La Paz y El Tigrito. Hacia mediados del año, un grupo de las Accu se instaló en la cabecera urbana de Ituango y en el mes de junio asesinó a 4 personas, luego se dirigió a la vereda La Granja, donde ultimó a 4 más. Desde allí, envió amenazas a la comunidad campesina de Santa Rita que, según sus palabras, “estaba en su mira”. Doce días después, un grupo armado asesinó a 3 personas en la vereda Bajo del Inglés. En noviembre, las muertes reaparecieron en la vereda La Georgia con el asesinato de un campesino; en el casco urbano, por medio de asesinatos y de incursiones violentas; en la vereda Santa Lucía, mediante amenazas que provocaron del desplazamiento de la población²⁸.

El año 1997 fue sin duda el más crítico, lo cual se expresa en el pico registrado en la tasa de homicidio. En abril, integrantes de los grupos de autodefensa asesinaron en diferentes sitios de Segovia a 14 personas. Entre el 22 de octubre y 12 de noviembre, las autodefensas realizaron un recorrido de terror y muerte entre Valdivia e Ituango,



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

²⁷ Es importante recordar que la expresión asesinatos se utiliza para señalar que son los homicidios donde se presume la actuación de los grupos irregulares.

²⁸ En el mencionado texto de María Teresa Uribe de Hincapié et.al, se narra con detalle estos hechos.

²⁹ El recorrido que hicieron las Accu, empezó en la vereda Puquí, del corregimiento Puerto Valdivia. El sábado 25 de octubre, las autodefensas llegaron al casco urbano de El Aro, para quedarse una semana entera. Después de cometer los asesinatos y someter a los pobladores a los peores vejámenes, los agresores prendieron fuego a la mayoría de las viviendas. Sólo quedaron a salvo la capilla, ocho casas y la escuela, aunque saqueada. Todas las propiedades fueron saqueadas y del recorrido por varias fincas se llevaron cerca de 1.200 cabezas de ganado caballar, mular y vacuno. Un total de 17 campesinos de El Aro fueron obligados, durante varios días, a arriar los animales, llevados primero a Puerto Valdivia y, de allí, a La Caucana, corregimiento de Tarazá.





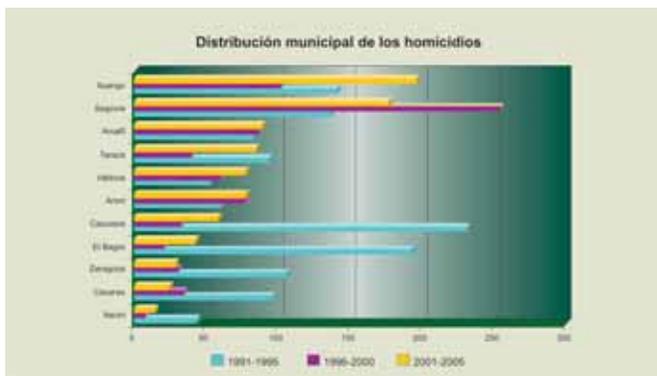
tras permanecer una semana en el corregimiento El Aro, dieron muerte selectivamente a 15 personas, posteriormente destruyeron el caserío Badillo y desplazaron a más de 700 personas²⁹. Ante la arremetida de las Accu, los insurgentes de las Farc se replegaron de las cabeceras municipales y zonas planas (en especial del eje bananero y sur de Córdoba) y se resguardaron en las estribaciones de las Serranías de Abibe, Ayapel, San Jerónimo y el Nudo de Paramillo.

En 1998, las autodefensas mantuvieron presencia en las posiciones sobre las cuales habían avanzado en los años anteriores y realizaron acciones en forma esporádica. A mediados del año, las AUC aparecieron ante el país con la propuesta de iniciar conversaciones con el Gobierno. En julio, representantes de la sociedad civil concretaron un acuerdo con Carlos Castaño y otros quince jefes de las AUC, para iniciar acercamientos con el Gobierno de Ernesto Samper. En el documento, conocido como *Acuerdo del Nudo de Paramillo*, se comprometieron a apoyar en forma directa todos los procesos que restablecieran la convivencia social y nacional. Sin embargo, en agosto, sólo quince días después de la firma del acuerdo, Carlos Castaño afirmó que el fragor de la guerra haría imposible garantizar en su totalidad el cumplimiento del acuerdo, y anunció que “acabaría con el ELN en la Serranía de San Lucas”.

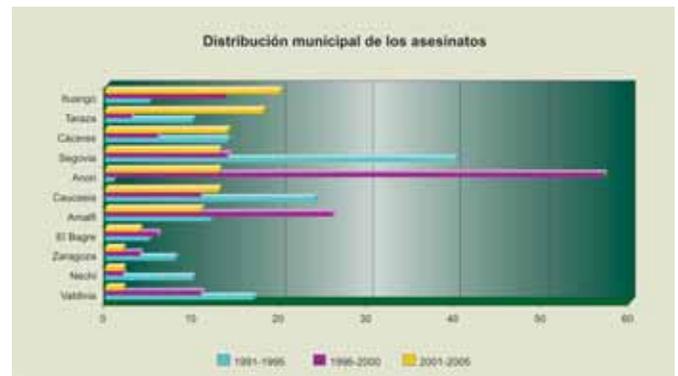
Hacia finales de los años noventa, la consolidación de la presencia de las AUC sobre los muni-

pios del Bajo Cauca se expresó en la disminución de la tasa de homicidio en El Bagre, Caucasia, Nechí, Zaragoza, Cáceres y Taraza. En sentido contrario, la violencia es particularmente intensa en los municipios periféricos. En Anorí, se presentaron dos masacres cometidas por las AUC, la primera en el mes de marzo de 1999, en el sector Los Ángeles, cuando fueron asesinadas 7 personas, en la segunda en junio de 2000, en la vereda La Meseta, 6 campesinos sindicados de ser colaboradores de la subversión fueron ultimados. Así mismo, en octubre de 2000, en el corregimiento El Cedral de Ituango, integrantes de las AUC incursionaron en la localidad y asesinaron a 7 de sus habitantes e incineraron 20 viviendas.

En el período 2001-2005, las tendencias de la violencia expresan los efectos del proceso de consolidación del dominio de los grupos de autodefensa sobre los municipios correspondientes al Bajo Cauca, en tanto que subsiste la disputa armada entre las autodefensas y la guerrilla por el dominio de los municipios de la franja del entorno, razón por la cual la tasa de homicidio registra niveles particularmente elevados y se incrementa con respecto a los dos periodos anteriores en Valdivia, Anorí, Amalfi e Ituango. En Segovia, pese a que el índice de homicidio se encuentra por encima del promedio nacional, se observa una importante reducción de la tasa con respecto al período anterior. En Tarazá, Nechí, Caucasia y El Bagre, si bien se producen incrementos en los índices, es importante señalar que mientras en el primero de estos



Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República

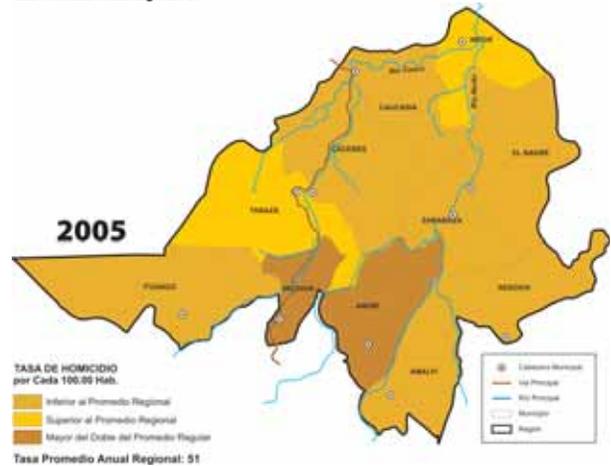
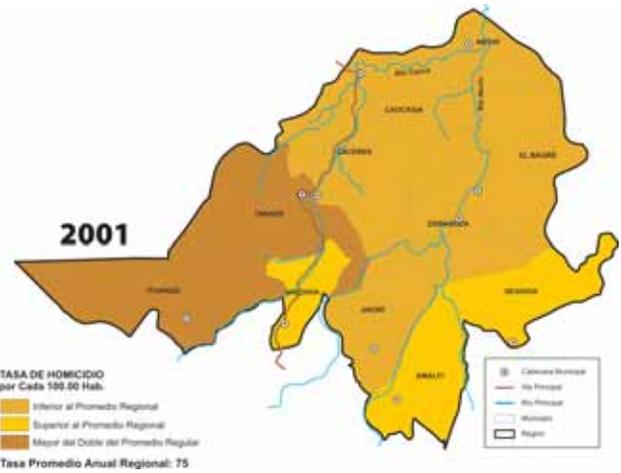
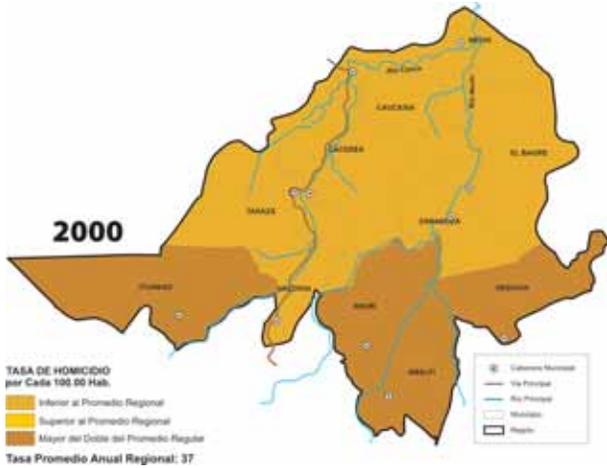


Fuente: Base de Datos Presidencia de la República y Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República





EVOLUCION DE LAS TASAS MUNICIPALES DE HOMICIDIO 2000-2005

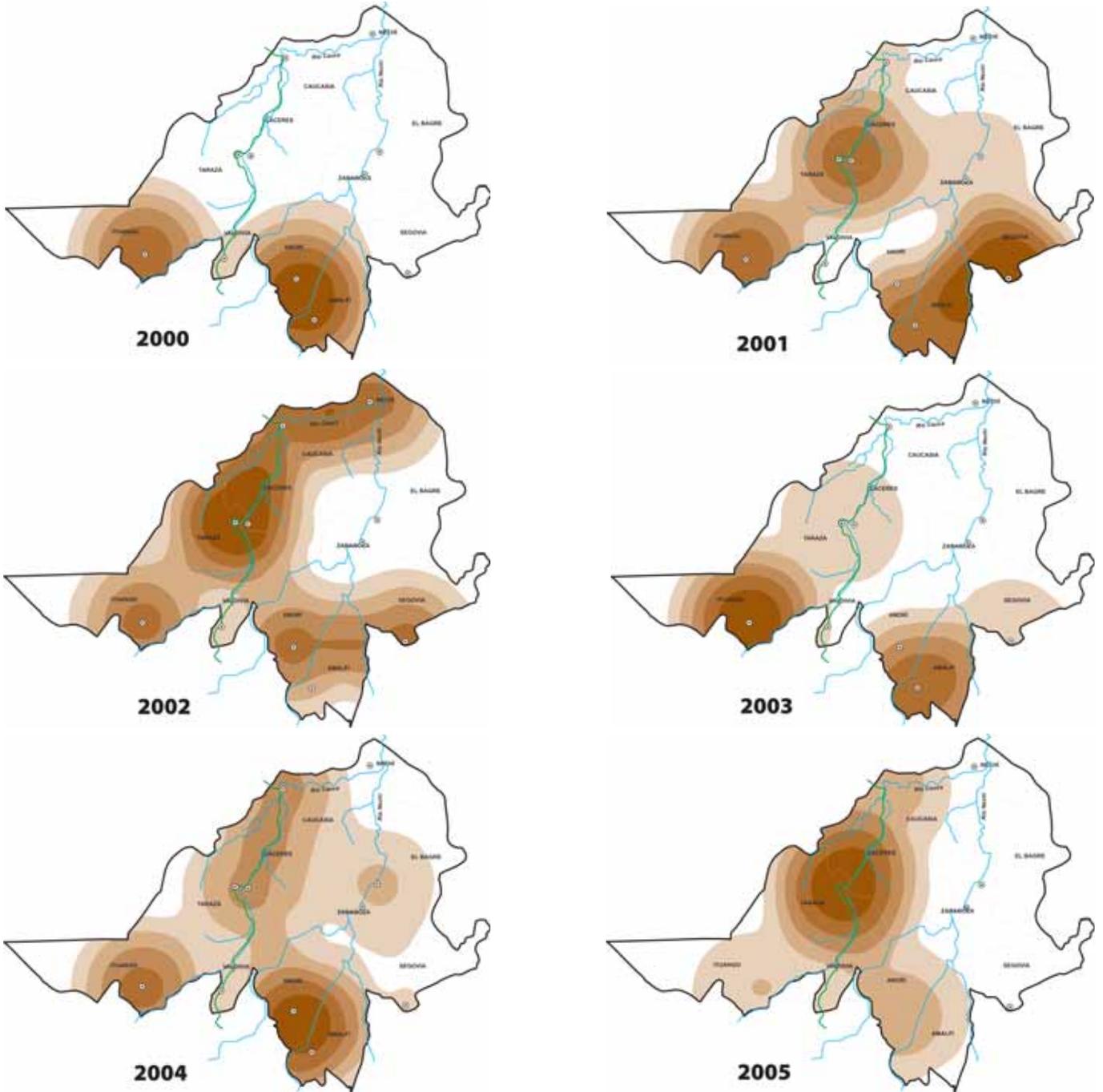


Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República
Fuente de información: Policía - Fuente base cartográfica: IGAC



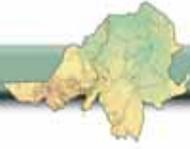


ASESINATOS ASOCIADOS A LOS GRUPOS IRREGULARES 2000-2005



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
 Vicepresidencia de la República
 Fuente de información: Das - Fuente base cartográfica: IGAC





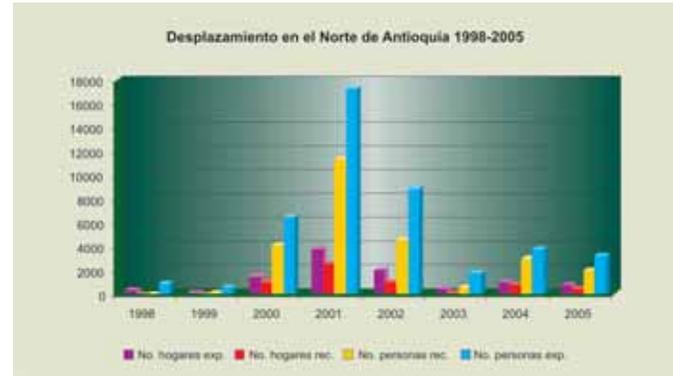
municipios la tasa de homicidio supera el promedio nacional, en los otros tres son inferiores a dicho promedio. En Cáceres y Zaragoza, se advierte la reducción de la tasa que comparativamente con los dos períodos anteriores es la más baja.

Como se mencionó en la sección anterior, entre 2001 y 2005 se produjeron 28 enfrentamientos entre las autodefensas y los grupos guerrilleros, que dejaron un número de víctimas tan alto que explica el brusco incremento del índice de homicidio observado en 2001³⁰. La preponderancia de los enfrentamientos directos entre los grupos irregulares no excluyó la comisión de masacres en las zonas en disputa, como la que se registró en febrero de 2001, en la vereda Machuca de Segovia, donde integrantes de las autodefensas asesinaron a 7 campesinos.

El cambio que experimentó la violencia masiva en este período es que fue ejercida principalmente por la guerrilla, en zonas donde se presentaron enfrentamientos directos, que a la postre resultaron ser más costosos para las AUC en términos de muertes en combate. Tres hechos ilustran el nuevo énfasis que adquirió la confrontación armada. En marzo de 2001, en la vereda Puerto Décimo de Ituango, subversivos de las Farc asesinaron a 4 personas. En abril del mismo año, en la vereda El Calvario de Cáceres, integrantes del frente Compañero Tomas del ELN asesinaron a 5 pobladores. En agosto de 2005, en la vía que comunica a Tarazá con Puerto Valdivia, vereda Raudal Viejo, integrantes de los frentes 18 y 36 de las Farc incursionaron y asesinaron con arma de fuego a 13 personas que laboraban como raspachines de coca y que fueron señaladas de colaborar con las AUC. En reacción, unidades del Ejército enfrentaron a los autores de la masacre y dieron muerte a dos de ellos.

Desplazamiento

El desplazamiento de la población es el resultado de la dinámica de la confrontación armada y el proceso de violencia que se presenta en la región y que tiene sus momentos más álgidos en



Fuente: Sistema Único de Registro – Agencia Presidencial para la Acción Social
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República

cuanto al recurso a la violencia masiva aplicada por las autodefensas entre 1996 y 1997 y el enfrentamiento directo entre la guerrilla y las AUC, entre 2000 y 2003, cuando se generaron desplazamientos poblacionales individuales, familiares y exodos masivos.

El desplazamiento forzado fue particularmente intenso hacia mediados de los años noventa, en correspondencia con la disputa por el dominio de los corredores estratégicos resaltados en este estudio. Cabe mencionar el caso de los desplazamientos que se dan en la vía Cáceres-Zaragoza y al sur del primero de estos municipios (veredas Anará, La Porcelana, Bejuquillo, San Juan, La Floresta, Muribá, Malabrigo, Peladero, San Pablo, Las Conchas). El elevado interés en esta vía por parte de los protagonistas de la confrontación radica en que permite el acceso a un cordón boscoso, que es zona de tránsito y que, por largo tiempo, fue zona de descanso y de refugio para la guerrilla, donde los cultivos de coca atizan la competencia armada.

De igual forma, la vía que va desde el corregimiento de Piamonte (Cáceres) hasta Puerto Colombia (corregimiento de Cauca) fue otro de los escenarios de desplazamientos, en razón a la valoración estratégica que se le asigna en medio de la confrontación. En esta zona de antigua influencia del ELN, las autodefensas, mediante el recurso a la

³⁰ Estas muertes están contabilizadas por el CIC de la Policía Nacional, bajo la modalidad de enfrentamientos.





violencia masiva y al terror, lograron el dominio pleno de las veredas Las Mojosas, Los Conchos, Las Frías y San Marcos. Por efecto del desplazamiento, Piamonte, que tenía 3.500 habitantes en 1995, vio reducida su población a 700 en 1997 con el ingreso de las autodefensas³¹.

Como se observa en el gráfico adjunto, la acción de los grupos armados irregulares en el Bajo Cauca y su entorno, entre 1998 y 2005, tuvo como consecuencia la expulsión de 42.621 personas. En este período, los municipios más afectados fueron El Bagre, Ituango y Tarazá, puesto que en el primero fueron expulsadas 11.400 personas, en el segundo 9.425 y en el tercero 7.031, entre los dos años considerados. Cabe destacar que en el año 2001, se registró el mayor número de desplazamientos en toda la región (17.258), principalmente como consecuencia de los enfrentamientos entre las AUC y las Farc.

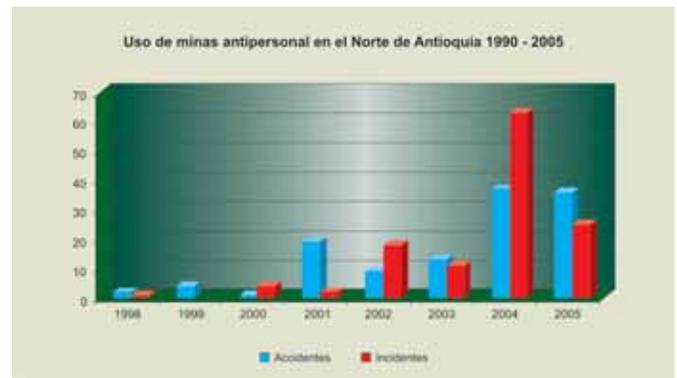
Aunque la mayoría de los desplazamientos se ha producido en forma individual, se debe tener en cuenta la importancia que adquirió el desplazamiento masivo en la región entre los años 2000 y 2003. Si bien en los años 1998, 2004 y 2005, no se registró ningún desplazamiento masivo, en el año 2000, representó el 44% del total, en 2001 el 47% y en el 2003 el 49%. Cabe señalar que este fenómeno está asociado a la amenaza de ataques a poblaciones por parte de grupos armados ilegales, la ejecución de masacres y de enfrentamientos con interposición de la población civil, mientras que los desplazamientos individuales están generalmente relacionados con amenazas personales y homicidios selectivos.

En la medida en que el desplazamiento forzoso provoca la pérdida de activos, la destrucción de redes sociales y el deterioro de las condiciones económicas en el municipio receptor, evaluar el impacto sobre el bienestar se constituye en una tarea prioritaria para determinar si la población desplazada debe ser objeto de programas especiales y no simplemente de los programas actuales para la población pobre. Así mismo, adquiere especial im-

portancia cuantificar las pérdidas, como un primer paso para emprender los procesos de restitución contemplados en la Ley de Justicia y Paz³².

Uso de Minas Antipersonal

Entre las nuevas formas de acción a las que los grupos guerrilleros recurren para compensar su inferioridad militar, que se ha expresada en el incremento de su movilidad para eludir los combates propuestos por las Fuerzas Militares y la multiplicación de los escenarios de la confrontación, se destaca el minado de los accesos a las zonas con alto valor para la guerrilla, con el fin de impedir el avance de las tropas terrestres, sin importar el alto impacto que esta práctica tiene en la población civil. De aquí que los accidentes que provocaron mayor número de víctimas militares entre 1998 y 2005, hayan ocurrido en Anorí, cuando en abril de 2005 ocho militares resultaron heridos, al caer en un campo minado instalado por el ELN; y en Ituango en abril y noviembre del mismo año, cuando en tres ocasiones, miembros de la Fuerza Pública activaron accidentalmente campos minados instalados por el frente 18 de las Farc. En el primer accidente, resultaron muertos 2 militares y 5 heridos; en el segundo, 2 militares resultaron muertos



Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República

³¹ María Teresa Uribe de Hincapié et.al, Desplazamiento forzado en Antioquia.

³² Sobre el particular, ver el trabajo de Ana María Ibáñez, ¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados?: Análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción, Documento Cede 2006-26, Universidad de los Andes, Facultad de Economía.





y 7 heridos, y en el tercero se presentaron 3 militares muertos y 4 heridos. Los accidentes que tuvieron mayor impacto en la población civil ocurrieron en Segovia en agosto de 1998 y en Tarazá en marzo de 2004. En la primera ocasión, fue activada una mina antipersonal instalada por miembros del ELN, resultando 3 civiles muertos y 2 heridos. En el segundo caso, resultaron tres civiles muertos, entre ellos un menor de edad y 5 heridos, de los cuales 3 eran menores de edad.

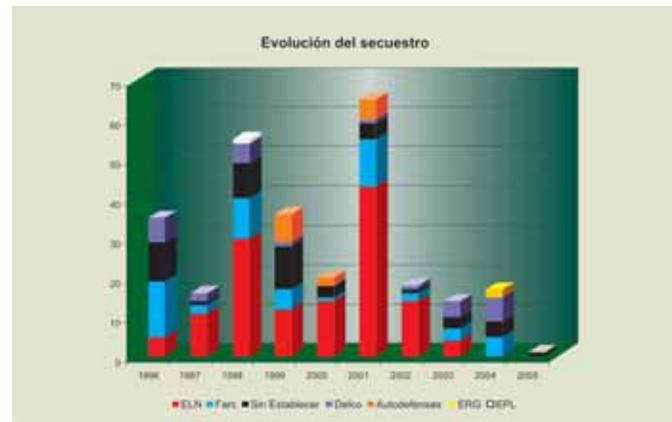
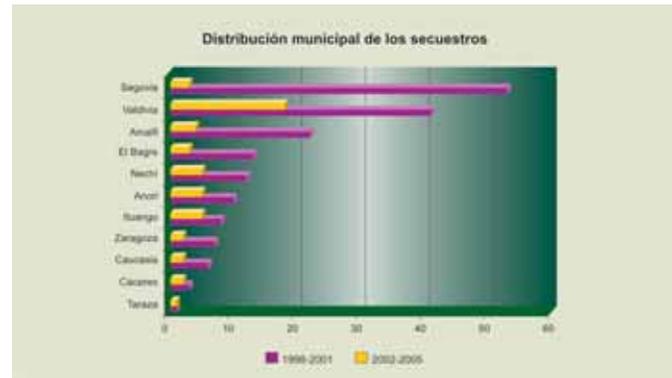
Entre los años 1998 y 2005, en el Bajo Cauca y su entorno se registraron 245 eventos por minas antipersonal que corresponden al 16% de los ocurridos en Antioquia, puesto que en el conjunto departamental, se contabilizaron 1.547 para el período. De los eventos ocurridos en la región, 124 correspondieron a incidentes y 121 a accidentes³³. El 63% de los incidentes estuvieron relacionados con casos de desminado militar, 35% con incautaciones y el 2% restante con sospecha de campos minados y fabricación de artefactos. Con respecto a los accidentes, 98% fueron casos por minas antipersonal (Map) y 2% por municiones abandonadas sin explotar (Muse).

De acuerdo con los registros del Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de DH y DIH, 196 personas resultaron afectadas por las minas antipersonal, de éstas 44 murieron y 152 resultaron lesionadas. 57% de las víctimas hacían parte de la Fuerza Pública, resultando muertos 28 y heridos 83, el restante 43% eran civiles, de los cuales 16 murieron y 69 fueron heridos. Los afectados fueron principalmente hombres mayores de edad (90%), mientras que las mujeres y los menores de edad constituyeron el 2% y 7% respectivamente. Cabe mencionar que entre los años 1998 y 2003, las víctimas fueron principalmente civiles, puesto que constituyeron el 81% de las personas perjudicadas por minas antipersonal en ese período. En los años 2004 y 2005, se produjo un cambio y aunque se registró un mayor número de civiles afectados que en el período anterior, la Fuerza Pública pasó a concentrar el 74% de las víctimas en estos dos años.

Por último, cabe destacar que los eventos ocurrieron principalmente en zona rural de los municipios de Ituango (77), Segovia (50), Anorí (32), Tarazá (23), El Bagre (22), Zaragoza (16) y Valdivia (16). Los eventos registrados en Ituango, Anorí, Tarazá y El Bagre fueron primordialmente accidentes, mientras que en Segovia predominaron los incidentes.

Secuestro

Las tendencias del secuestro en el Bajo Cauca y su entorno corresponden a las observadas a nivel nacional, es decir muestran una importante caída a partir de 2002 y en 2005 registró su nivel his-



Fuente: Fondelibertad
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH,
Vicepresidencia de la República

³³ Cuando se habla de eventos por uso de minas antipersonal, se hace referencia a accidentes e incidentes. Los accidentes están relacionados con eventos que han dejado alguna víctima (mortal o lesionada), mientras que los incidentes se asocian a eventos que tienen nexos con las minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar, tales como incautaciones, campos minados o sospecha de campos minados.





tórico más bajo. La evolución del secuestro entre 1996 y 2005, que se presenta en los gráficos adjuntos, permite identificar los años más álgidos, los grupos responsables de la ejecución de los plagios y los escenarios municipales afectados.

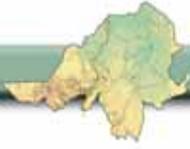
En el período examinado, se llevaron a cabo 281 secuestros en la región, siendo 1996, 1998, 1999 y 2001 los años que concentraron mayor número de casos. Los secuestros comienzan a descender a partir de 2002 y con un solo caso registrado en 2005, se define una clara tendencia que contrasta con lo observado entre 1998 y 2001. Del total de secuestros, el mayor número corresponde al ELN con 133, seguido por las Farc con 55, la delincuencia común con 26, los grupos de autodefensa con 14, el ERG con 2 y el EPL con 1. En 50 de los casos reportados, no se identificó a los responsables. Cabe anotar que la participación del ELN en la ejecución de secuestros muestra una dinámica atada a la confrontación armada, puesto que a partir de 2003, en la medida en que los combates se incrementan y su actuación armada cae, el grupo guerrillero deja de realizar

secuestros. Si se compara el periodo 2002-2005 con el anterior, que se extiende entre 1998 y 2001, tal y como se hace en los gráficos adjuntos, se advierte la magnitud de los cambios, expresados principalmente en que el ELN pasó de realizar 99 secuestros a 18, las Farc de 28 a 10, las autodefensas que cometieron 14 en el primer periodo, en el segundo no realizan ninguno y los casos por establecer pasaron de 27 a 9. Por el contrario, la delincuencia común parece estar ganado espacio frente a las organizaciones que realizan secuestros en la región con el incremento de los 7 a 11 casos, lo cual también explicaría el repunte de los secuestros observado en 2006 con respecto al año anterior.

Finalmente, la distribución geográfica de los secuestros, a partir de la comparación de los dos últimos cuatrienios corrobora que la reducción de los eventos se produjo en todos los municipios. Los escenarios donde la caída del secuestro es particularmente significativa, como se infiere al observar el gráfico adjunto, corresponden a Segovia, Amalfi, El Bagre, Zaragoza y Caucasia.



Nativo de la región buscando oro - Población de Nechi (Foto: VIZTAZ)



SINOPSIS: ESTADO DE LA CONFRONTACIÓN Y VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

En este último periodo, la dinámica de la confrontación muestra los avances del Estado en el propósito de lograr el restablecimiento del orden público como condición indispensable para asegurar el control eficaz del territorio.

En este estudio, se pudo establecer que la localización de las organizaciones guerrilleras en el Bajo Cauca responde a propósitos estratégicos, lo cual deja con poco piso las explicaciones de su presencia e intensidad en función de la existencia de *condiciones objetivas*. Como se ha visto, durante el proceso de implantación, la guerrilla consideró la zona por su posición privilegiada en términos de permitir la comunicación con el Urabá, la Serranía de San Lucas y el Magdalena Medio. Fue en el territorio de Cáceres y Zaragoza, la reserva del Bajo Cauca y Anorí, donde el ELN y las Farc lograron desarrollar sus bases y establecer sus zonas de captación de recursos, refugio y operación. Por lo tanto, más que la precariedad en las condiciones de vida de sus habitantes, las ventajas que ofrece la región para el desarrollo de la confrontación juegan un papel central en la explicación de la presencia de los actores armados y la intensidad de su accionar.

También, se presentó evidencia suficiente que permite poner en duda la lógica de protección a la que las organizaciones de

autodefensa han apelado para justificar su presencia, como si constituyeran una simple respuesta a una demanda de “seguridad” por parte de la población bajo presión de los grupos guerrilleros. En efecto, al estudiar la experiencia de esta región, se descubre que la oferta de protección de los grupos de autodefensa es mayor a la demanda, que esa oferta se acompañó del uso real de violencia y, lo que es más importante, que en lugar de acabar con una situación de inseguridad, terminaron alimentándola. De manera que las autodefensas lograron extenderse por toda la región del Bajo Cauca, sembrando el terror y dirigiendo la violencia contra todo lo que percibieron como bases de la subversión (dirigentes de izquierda, líderes sociales, sindicalistas, campesinos y trabajadores). En el trasfondo de todo lo anterior, se encuentran los intereses del narcotráfico, que adquirió grandes extensiones de tierra y con el fin primordial de amparar sus actividades ilícitas, realizó alianzas muy complejas con diferentes actores regionales.

De otra parte, se planteó una periodización de la confrontación

armada en el Bajo Cauca desde la década de los noventa, a través de tres fases: 1991-1995, 1996-2000 y 2001-2005. El período 1991-1995 se caracteriza por la alta intensidad que adquiere la confrontación, que es reflejo de la dinámica de las tendencias a nivel nacional y departamental, y es en el ámbito regional el período más álgido por cuenta del elevado accionar del ELN y el incremento de los combates de las Fuerzas Militares, que se dirigen principalmente contra esta guerrilla.

En el período 1996-2000, pese a que se mantiene el mayor protagonismo armado en cabeza del ELN y que esta guerrilla sigue siendo la más combatida por la Fuerza Pública, se establece una clara diferencia con el anterior, por cuanto se produce una disminución en la intensidad de la confrontación. En el período 2001-2005, la dinámica de la confrontación tiene una elevada integración, con respecto a las tendencias observadas a nivel nacional y departamental, mostrando cómo el escalamiento se produce por los combates que comienzan a dirigirse principalmente contra las Farc, guerrilla





Hacienda Ganadera - Poblacion de Caucasia (Foto: VIZTAZ)

que, a partir de 2003, asume el protagonismo armado en la región. En este período, la actividad armada de los grupos de autodefensa, que ya era ostensible en 2000, registra su nivel más elevado. En este último periodo, la dinámica de la confrontación muestra los avances del Estado en el propósito de lograr el restablecimiento del orden público como condición indispensable para asegurar el control eficaz del territorio. La iniciativa militar duplica las acciones que realizan los grupos irregulares y en el caso particular de la guerrilla, supera cuatro veces los hechos realizados por las Farc y tres veces los cometidos por el ELN.

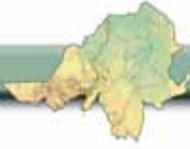
Las manifestaciones de violencia presentan una elevada correspondencia con la evolución de la confrontación armada y en particular con las estrategias y movimientos de los grupos armados ilegales. De aquí el énfasis del estudio en establecer la relación

entre la evolución de la confrontación, las condiciones estratégicas en las que ocurre y el recurso a la violencia masiva y a la violencia selectiva. Pese a que desde los años ochenta, se venía aplicando en el Bajo Cauca una política dirigida a enfrentar las causas generadoras de violencia mediante el PNR, la confrontación armada se escala y adopta rasgos propios de la región. Entre otros, cabe destacar el crecimiento de los grupos insurgentes, que dominan amplias zonas, el incremento de la presencia de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de los grupos de autodefensa como un actor armado que no sólo responde a la lógica de defensa de los intereses económicos preponderantes afectados por la guerrilla, sino que se traza como objetivo principal disputarle a la subversión los territorios y posiciones estratégicas bajo su dominio.

En la década de los ochenta, se comienzan a demarcar dominios

territoriales entre los grupos irregulares y ante la decadencia de la producción aurífera, surge como alternativa de financiamiento la producción de coca, en la que adicionalmente se insertan sectores de la población. Mientras la confrontación armada es protagonizada por la guerrilla y el Ejército, las autodefensas locales existentes en el Bajo Cauca reciben apoyo de grupos más grandes, que se extienden rápidamente desde Urabá y Córdoba y el Magdalena Medio. Las Accu iniciaron su penetración a la región por los municipios de Ituango y Valdivia. Por otra parte, las masacres ocurren en las poblaciones de El Bagre, Cáceres, Valdivia y Segovia.

El avance de las Accu en los años noventa estuvo acompañado del recurso a la violencia para garantizar territorios de retaguardia, apropiarse de suelos fértiles, ampliar la frontera agrícola y debilitar al ELN, golpeando especialmente a su base social. Hacia finales de la década, la consolidación del dominio de las AUC sobre los municipios del Bajo Cauca se expresa en la disminución de la tasa de homicidio en los municipios del Bajo Cauca, El Bagre, Cauca, Nechí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá, donde la presencia de este actor encuentra apoyo en algunos sectores sociales y logra permear algunas de las instancias de los gobiernos locales. En efecto, la caída de los índices de violencia entre 1998 y 1999, luego de registrar su momento más álgido entre 1996 y



1997, se produjo al amparo del mal llamado proceso de “*pacificación*”, por la vía del dominio cada vez mayor del narcotráfico y de los grupos de autodefensa sobre la región.

Los cambios en la dinámica de la confrontación muestran como los grupos de autodefensa, que en la década del noventa recurrieron principalmente a los ataques contra la población, a partir de 2001, recurren al enfrentamiento directo, que produce un elevado número de víctimas entre los actores que sostienen los choques armados. Entre 2001 y 2005, se producen 28 enfrentamientos entre las autodefensas y los grupos guerrilleros, que arrojan un número de víctimas tan alto que explica el brusco incremento del índice de homicidios en 2001. El cambio que experimenta la violencia masiva en este período se expresa en que es ejercida principalmente por las Farc, en zonas donde se presentan enfrentamientos directos que, a la postre, resultaron más costosos para las AUC en términos de número de bajas.

En 2004, una vez cesaron las acciones emprendidas por el Ejército, en el marco de la operación “*Motilón*”, con la finalidad de debilitar el poder de las Farc en las áreas rurales de Ituango, esta guerrilla retornó a las veredas y corregimientos, castigando la acogida brindada por los pobladores a la Fuerza Pública³⁴. Al respecto, cabe señalar que en septiembre de 2005, integrantes del frente 36 incursionaron en algu-

nas veredas del Nudo de Paramillo, intimidando a sus pobladores y generando un desplazamiento de 138 campesinos. El recorrido se realizó por las veredas Alto de los Ángeles, Los Leones, Montenegro, La Estrella, El Castillo y San Agustín de Ituango, anunciando que se iba a presentar una situación difícil en el cañón de San Jorge. Como se mencionó anteriormente, otra incursión de las Farc se había presentado en agosto, en la vereda Paloma del corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, donde fueron asesinados 13 campesinos, que se desempeñaban como raspachines. El lugar donde ocurrió la masacre limita con Tarazá, en una zona de influencia del bloque Mineros y una de las regiones con mayor número de cultivos de coca en Antioquia.

La conducta observada recientemente en las Farc sugiere que esta guerrilla estaría aprovechando la desmovilización de las autodefensas para incursionar nuevamente en las zonas en las que durante varios años no pudieron ingresar por la presencia de estos grupos. Durante 2006, las operaciones del Ejército han logrado contener a las Farc. Entre las principales infracciones al DIH perpetradas por parte de esta guerrilla, fuera de los homicidios de civiles, sobresale la siembra indiscriminada de minas antipersonal.

Ante las inequívocas señales dadas por el frente 36 de las Farc de tener firmes intenciones de re-

tomar el control de las zonas coqueras, existen versiones según las cuales sectores de los desmovilizados del bloque Mineros de las AUC, se habrían dedicado a la protección de las áreas de producción. El hecho de que presuntos desmovilizados estén retomando las actividades que antes ejercían con las autodefensas es preocupante e indicaría que la desmovilización no conllevó al desmonte de las actividades ilegales amparadas por estos grupos en el pasado.

Pese a que las acciones armadas bajaron y que ya no hay presencia activa, todo apunta a que subsisten retaguardias en la región y que algunos de los desmovilizados, de forma individual o asociados con *bandas*, siguen desarrollando actividades ilícitas. Dos hechos ocurridos en 2006 permiten dudar de la desactivación de la totalidad del bloque Mineros. En el mes de marzo, en Cauca, tres personas fueron asesinadas, una de ellas era un mando medio de ese bloque, pero su nombre no figuraba en las listas de desmovilizados.³⁵ En agosto, fueron asesinadas seis personas de una misma familia, al parecer por ex-integrantes de las autodefensas en la vereda El Castillo del municipio de Zaragoza. La masacre se registró en una zona coquera, donde hay una presencia recurrente de per-

³⁴ Sistema de Alertas Tempranas – Sat, informe de riesgo No. 027-06 Fecha: 16 de junio de 2006. Defensoría Delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia de la confrontación armada.

³⁵ ¿Se acabaron los ‘paras’ en Antioquia?, El Tiempo, Marzo 4 de 2006.





sonal que antes estuvo vinculado con las AUC.

Los cambios recientes en la dinámica de la confrontación se expresaron en la tendencia ascendente que presentaban los homicidios en varios de los municipios del Bajo Cauca y su entorno en 2005. Las series de mapas sobre la evolución de los homicidios y los asesinatos muestran la correspondencia entre el incremento de los asesinatos cometidos por grupos irregulares y la elevación de las tasas de homicidio en los municipios de Tarazá, Cáceres y

Caucasia. Los índices en 2005 son particularmente altos en Valdivia, Anorí, Nechí y Tarazá. Así mismo, se advierte la elevación de las tasas en Cáceres, Cauca y Tarazá, pero sin que superen el promedio regional.

El incremento de las manifestaciones de violencia, los brotes de criminalidad que sobrevienen a la desmovilización de los grupos de autodefensa y el nuevo escenario que muestra cómo la guerrilla de las Farc tendría serias intenciones de volver a hacer presencia en las zonas de las cuales

fue desterrada, configuran un inquietante panorama de la región del Bajo Cauca en el momento actual. De aquí, la importancia de persistir en el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad, indispensables para lograr la consolidación territorial por parte del Estado, restableciendo el funcionamiento normal de la administración de justicia, fortaleciendo la democracia local, atendiendo las necesidades más urgentes de la población, extendiendo los servicios esenciales e impulsando proyectos productivos sostenibles.

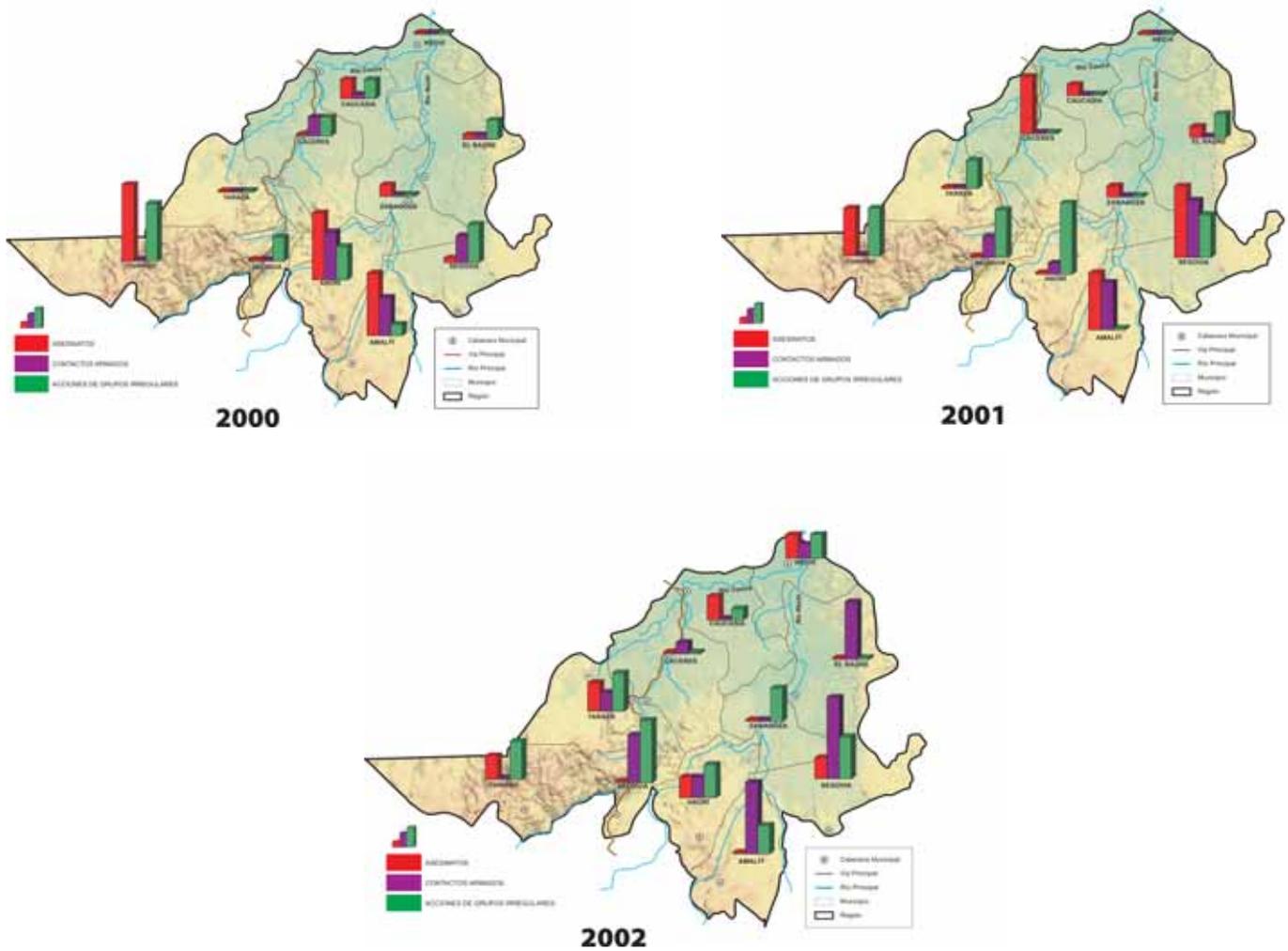


Río Cauca - Población de El Bagre (Foto: VIZTAZ)



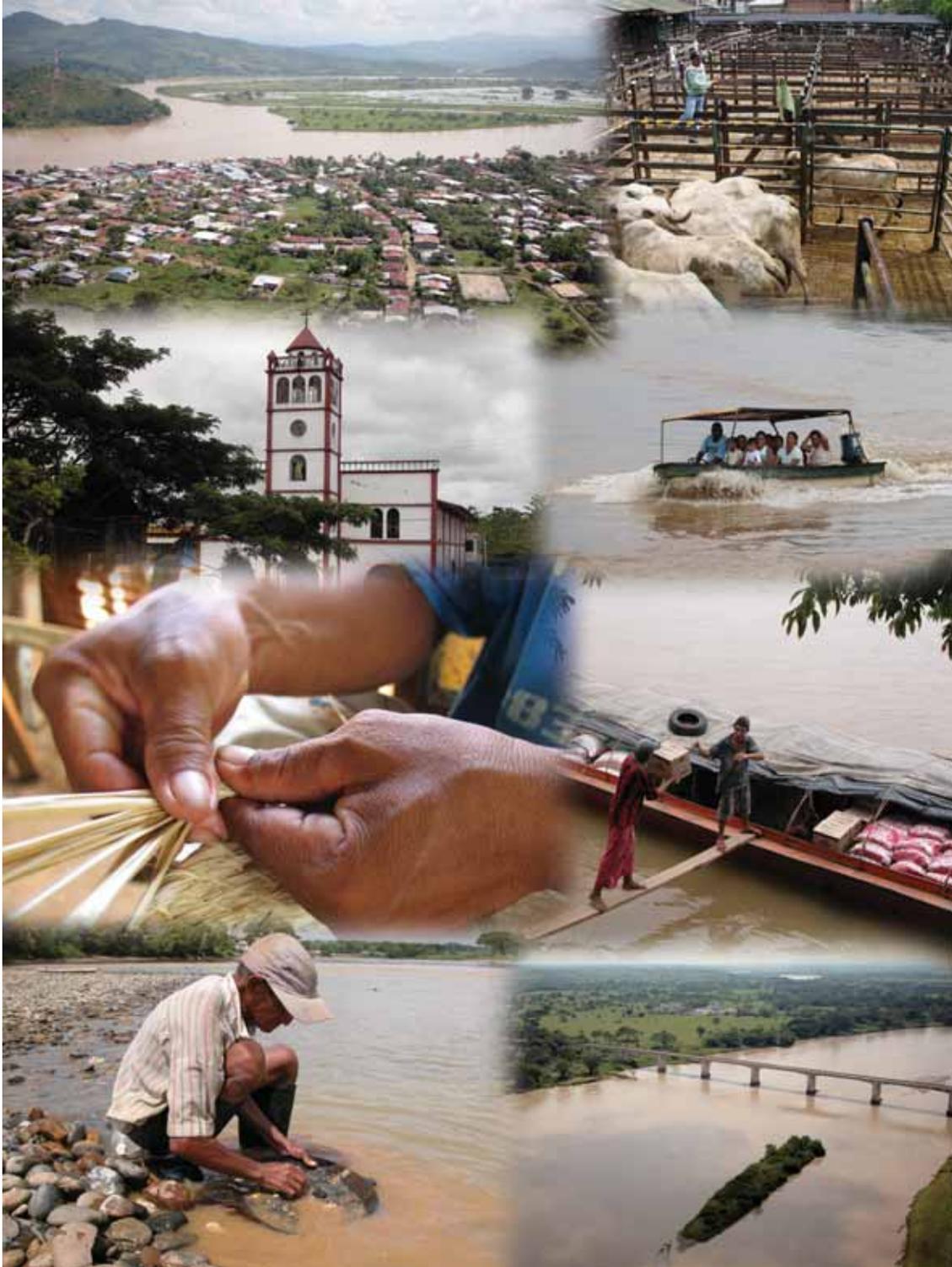
ANEXOS

DISTRIBUCION MUNICIPAL DE LOS COMBATES, ACCIONES ARMADAS Y ASESINATOS 2000-2002



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH
Vicepresidencia de la República
Fuente de información: Das
Fuente base cartográfica: IGAC







Observatorio del
Programa Presidencial
de Derechos Humanos
y DIH



PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH

Coordinación Editorial: Observatorio de Derechos Humanos y DIH

Calle 7 No. 6-54 Bogotá

Tels: (571) 334 5077 • Fax: (571) 565 9797

E-mail: observatoriodh@presidencia.gov.co

Distribución Gratuita.

Está permitida la reproducción total o parcial del texto citando la fuente.

Diseño y Diagramación: National Graphics Ltda.

nationalgraphicsltda@yahoo.com

Fotografía: Viztaz

Impresión: National Graphics Ltda.

Diciembre 2006